

UNA HISTORIA DE EXTRACTIVISMO Y ALIMENTACION.

El caso de California, Santander

Héctor Ricardo Vargas Sanchez

Universidad Externado de Colombia | Maestría en Estudios de Familia

Tabla de contenido

Tabla de contenido	1
Anexos	3
Introducción	5
Metodología de investigación.	9
1. Historia minera	15
1.1 De santos, entierros y extranjeros en California.....	15
1.2 Extractivismo y alimentación	23
1.3 Entre el campesino y el minero	32
1.4 Postura económica de Colombia	39
2 ¿Seguridad alimentaria?	45
2.1 Practicas alimenticias	54
2.2 ¿Es posible la coexistencia del modelo extractivista o neoextractivista y la seguridad alimentaria?	64
2.3 Relación entre Estado, sector privado y comunidad en California.....	70
2.4 Papel de la “empresa” en California y su papel en la perspectiva del territorio.....	80
3. Derechos humanos y de los niños relacionados con alimentación	87
3.1 Situación de los niños y jóvenes con respecto a la alimentación	91
4. Conclusiones.....	100
4.1 Recomendaciones:	105
5. Bibliografía	107

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1 Resultado de cartografía social referente a los recursos presentes en el territorio.....	12
Ilustración 2 San Antonio de Padua en Santuario de California.....	16
Ilustración 3 San Antonio entre el agua y el oro (elaboracion propia)	20
Ilustración 4 Porcentaje de tierra destinada a agricultura	47
Ilustración 5 Porcentaje de unidades de explotación minera discriminado por escalas de producción	48
Ilustración 6 Mapa de la provincia Soto Norte	51
Ilustración 7 relación entre Estado, comunidad y sector privado. (elaboración propia).....	72

Tabla de tablas

Tabla 1 Tipos de minería discriminados por descripción y vigencia.....	34
Tabla 2 Producción agrícola y pecuaria del municipio.....	57
Tabla 3 alimentos consumidos discriminados por actividad laboral (elaboración propia).....	61
Tabla 4 Valor de exportación en bienes primarios de países en América Latina y el Caribe	66
Tabla 5 Indicadores de salud recién nacidos.....	75
Tabla 6 Acceso educativo discriminado por niveles.....	77
Tabla 7 Escenarios proyectados de acuerdo a papel de Minesa (elaboración propia)	80

Anexos¹

Anexo 1 Transcripción de cartografía social

¹ Todos los anexos se encuentran disponibles en medio magnético

Anexo 2 Análisis general y particular de cartografía social

Anexo 3 Diario de campo sistematizado

Anexo 4 Matriz general de perfiles de vulnerabilidad y generatividad

Anexo 5 Análisis de perfiles aplicados para esta investigación

Introducción

La siguiente investigación es realizada en el contexto de la Maestría en Estudios de Familia de la Universidad Externado de Colombia al interior del Área de Familia, específicamente en la línea de investigación interculturalidad, tecnologías y dinámicas familiares. Este proyecto articula a la facultad de Finanzas y Relaciones Internacionales y la facultad de Ciencias Sociales y Humanas con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF. La unión es efectuada con el fin de crear un modelo de articulación interinstitucional para prever y evitar condiciones de vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en contextos mineros. En este caso, se trata de un ejercicio de análisis crítico con respecto a la situación particular que se desarrolla en el municipio de California ubicado en el departamento de Santander. Este ejercicio se enfoca en las interacciones sociales entre diversos sistemas como el sector privado, la comunidad presente en el territorio e instituciones gubernamentales.

En relación con el proceso investigativo, es preciso comentar que se trata de una dialogo interdisciplinar, con un aporte teórico y práctico amplio aportado por los seis investigadores involucrados. En el caso de mi investigación, se trata de un análisis enfocado a las condiciones sociales, económicas y políticas del municipio de California, pues se proyecta la llegada de la empresa Minesa para dar continuidad al proyecto Angosturas que busca adquirir los derechos de explotación a gran escala de los recursos auríferos que se encuentran en la región de Soto Norte.

Esta investigación será un análisis enfocado en la construcción de las practicas alimenticias de la comunidad californiana, que teniendo en cuenta la gran dependencia que existe de actividades relacionadas con la explotación aurífera, la poca dedicación de tiempo y tierra a la agricultura; así como la existencia de prácticas que afectan la calidad del agua y la salud de la población en general, serán trascendentales para comprender las dinámicas sociales del territorio.

En consecuencia, la pregunta de investigación de la que emerge este proyecto es ¿Cómo se hacen posibles las practicas alimentarias en el municipio de California, Santander para generar sostenibilidad del ecosistema en relación con la seguridad alimentaria?, esta pregunta tiene como principio tres categorías base: las practicas alimenticias como una amalgama de condiciones políticas, económicas y sociales que se materializan en prácticas concretas alrededor de alimentos, mercados y formas de entender el territorio, la seguridad alimentaria como una apuesta ideológica de las condiciones mínimas que debe asegurar un Estado para el desarrollo de las capacidades de sus ciudadanos y la sostenibilidad como norte orientador de los contextos sociales en medio de una economía desarrollada a partir de la industrialización y un sostenido abandono del sector rural en sistemas económicos como el que se ha impuesto en Colombia.

La inquietud de la que se desprende esta investigación nace a partir de una lectura no empírica del contexto. Es decir, a partir de una sensación o presentimiento con respecto a lo que sucedía en el territorio de California, a partir de este presentimiento se planifico una búsqueda con respecto a lo que sucede en una parte significativa de los territorios en donde las actividades extractivas como la explotación de hidrocarburos o metales y piedras preciosas se han erigido como la columna vertebral de la económica local.

De manera especulativa, esta investigación fue formulada a partir de una creencia particular y es que, si la mayoría de las personas que habitan en estos territorios dedican sus labores a actividades relacionadas con la explotación de minerales, entonces, ¿de donde provienen los alimentos que consumen? Si bien esta inquietud puede parecer irrelevante en algunos casos; es importante resaltar la manera en que las practicas alimenticias de los distintos contextos pueden dar pistas con respecto a todo un universo de simbologías, dinámicas económicas e ideologías políticas que son creadas y comprendidas de manera contextualizada.

A partir de la pregunta de investigación nace una serie de objetivos que enmarcan la investigación y que serán desarrollados a lo largo de estas páginas. Ellos son:

Objetivo general:

Analizar las condiciones sociales y económicas presentes en el municipio de California, Santander, partiendo del interés por identificar si existen condiciones para dar cumplimiento al cuarto principio fundamental de la Convención de los derechos de los niños, referente al derecho a la alimentación adecuada.

Específicos:

- Investigar si existe una cultura agropecuaria en California y si esta puede cubrir la demanda existente por la comunidad habitante del municipio
- Indagar si la oferta alimenticia existente es accesible a los niños, niñas y jóvenes de la zona y si se trata de una alimentación adecuada para las rutinas cotidianas del contexto.
- Identificar que prácticas cotidianas relacionadas con la explotación minera a pequeña y gran escala pueden poner en peligro la seguridad alimentaria y el acceso a una alimentación adecuada en California, Santander
- Definir la forma en que el cambio de modelo productivo debido a la entrada en funcionamiento de Minesa puede afectar el acceso a una alimentación digna por parte de los californianos
- Relacionar el modo en que se da la entrada en funcionamiento de Minesa con la doctrina económica del país y el modo en que esta afecta la cotidianidad de los habitantes en California.

Durante la etapa de acercamiento a campo fue posible percibir una tensión entre las actividades mineras y agrícolas, esta tensión es una condición problemática para asegurar el acceso a una alimentación adecuada, teniendo en cuenta que es uno de los principios de la Convención de los Derechos de los Niños y uno de los derechos de existencia; todos ellos principios fundamentales para asegurar el bienestar y buen vivir de los niños, niñas y jóvenes de California, Santander, convirtiéndolos en parte fundamental de este análisis, al entenderlos como parte de un sistema complejo que se encuentra en constante cambio e interacción con fenómenos exógenos y endógenos como la familia.

Debido a que se trata de una investigación contextual, las construcciones sociales alrededor de los derechos inherentes a los niños, niñas y adolescentes del municipio deberán ser entendidos siempre como campos de interacción, en los que la postura institucional tiene una posición casi absolutista y en muchos casos debe enfrentar concepciones opuestas en la práctica, puesto que se trata de convenciones propensas a interpretación de forma continua, por ello el incumplimiento de uno o más de estos derechos no es necesariamente visto como una vulneración de los mismos, esta es una idea que se desarrollara más adelante.

Metodología de investigación.

En términos teóricos esta investigación se fundamenta en la teoría de la complejidad y su concepción de los fenómenos sociales como sistemas en constante cambio y su complementariedad (Bateson, 1998). En consecuencia, las técnicas utilizadas para el acercamiento a campo tienen como hilo conductor una visión participativa y humanista. En consecuencia, nace la necesidad de propiciar un papel activo por parte de la comunidad en la construcción de los datos analizados. En este sentido, se erige la etnografía como metodología central para la ejecución del proceso, ya que se concibe el proceso de indagación como una “exploración de la naturaleza de los fenómenos sociales” (Navarrete, 2004, p. 289); acompañada de la cartografía social como complemento para la construcción de información relativa a los constructos sociales del territorio y los perfiles de vulnerabilidad y generatividad familiar como herramienta interpretativa de las dinámicas familiares del territorio.

La etnografía es propuesta como metodología transversal para esta investigación debido a que, en sí misma es una forma de construcción de conocimiento participativo y contextual. Se trata de la emergencia de nodos de interés contruidos a través de la conversación; estas conversaciones y observaciones se convierten en insumos para conocer prácticas, creencias y estructuras culturales que serían inaccesibles para un investigador cuyo interés no radique en generar diálogos en condiciones de informalidad, esto se ha denominado como entrevistas no dirigidas (Rosenberg, 2016), ya que se enfoca en la generación de tópicos y focos de conversación a partir de la construcción conjunta entre dos agentes tejedores de conocimiento.

Es allí donde el papel del etnógrafo empieza a delinear la complejidad de su acción; se trata de una labor de alto impacto subjetivo debido a que su finalidad es analizar la realidad que ha sido construida en un contexto y espacio de tiempo particulares y su interpretación debe ser hecha a partir de las nociones, categorías y acciones que existe en quienes ejecutan el fenómeno a estudiar. En este sentido, la etnografía se complementa con la metodología de Investigación Acción Participante (Fals-Borda, 2008) formulada en la investigación general, pues se trata de generar una comprensión compleja y contextual de la realidad que es vivida en cada lugar a través de una visión construccionista de la misma. “Esto supone no limitar el análisis o las posibilidades de acción en ningún sentido y abrirse a la interdisciplinariedad del conocimiento, aprovechando los aportes de los diversos enfoques” (Pereda, de Prada, & Actis, 2003, p. 79).

Sin embargo, este método de indagación no es ejecutado de forma aleatoria, sino que debido a la forma en que se ha planteado la investigación, se ha enfocado en lo que se entiende como agentes estratégicos; estos son agentes que se encuentran en la comunidad y que permiten conocer a través de sus experiencias y las conversaciones entabladas, las construcciones sociales que existen en su ecosistema social, claramente influenciados por coyunturas y procesos estructurales, pero que sin duda alguna son productos del accionar de un sistema cultural articulado. (Gonzalez & Valdivia, 2017). Esta estrategia obedece a algunas limitaciones que supone la corta estadía en campo y la imposibilidad de lograr sumergirse a profundidad en la cotidianidad de los habitantes del territorio. Con respecto a los espacios en donde se lleva a cabo la etnografía, es de resaltar que esta metodología se ejecuta en lugares donde los agentes constructores de conocimiento se sienten identificados y los entienden como significativos en su cotidianidad. Es decir, no se trata de un ejercicio investigativo controlado o en espacios prefabricados, sino que se trata de una investigación contextual literalmente. Por ello, con el fin de lograr un análisis de los modos

productivos presentes en California es necesario acudir a los lugares en donde se da la oferta y la demanda de los mismos; fue necesario entonces indagar por los lugares neurálgicos y significativos de quienes habitan permanentemente en el municipio.

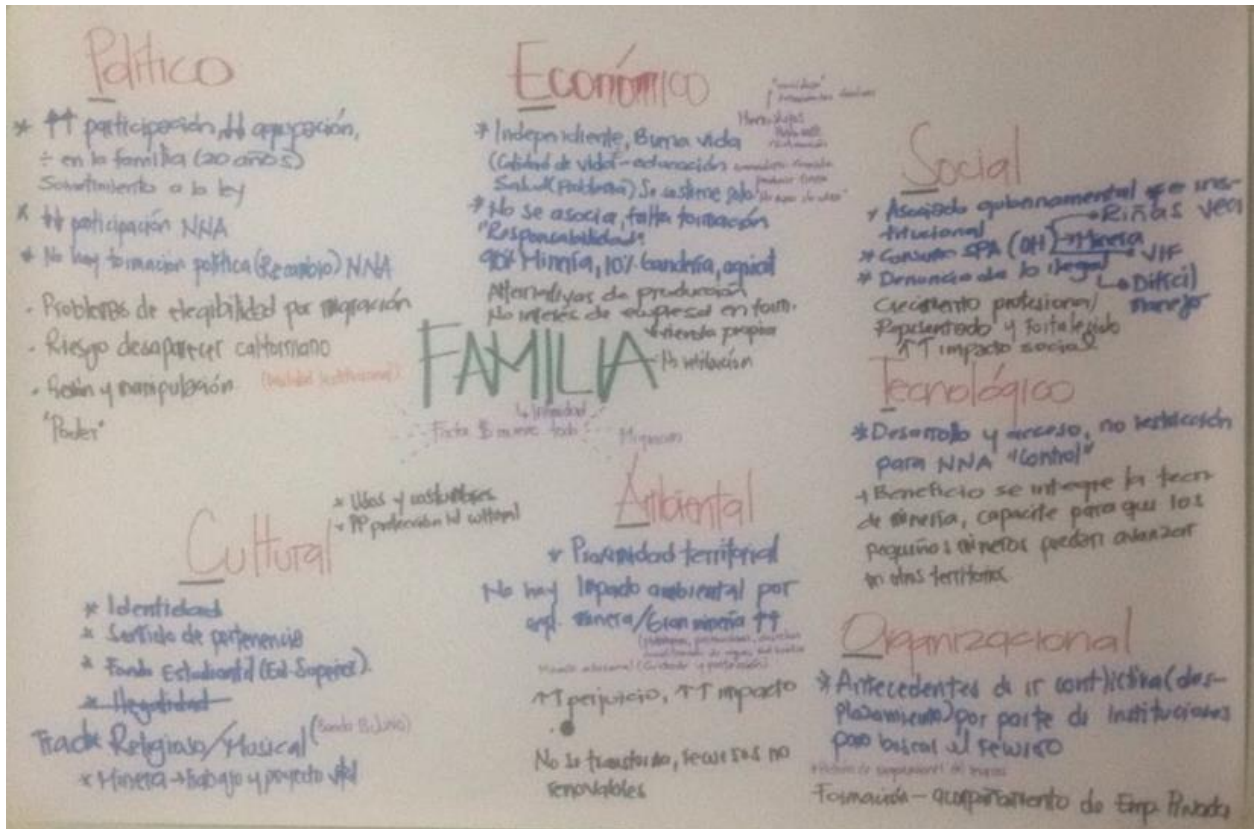
La información que se analizara en este documento fue construida a partir de dos salidas de campo efectuadas durante los meses de agosto y octubre de 2017. Cada una de ellas tuvo una duración de 5 días y fueron diseñadas estrategias metodológicas transversales que permitieran la construcción de información con diferentes actores del municipio y enfocadas a temáticas que abarcaran todos los intereses del equipo investigador. Por tanto, la primera salida de campo se enfocó en conocer, identificar y analizar los problemas, recursos y vínculos con los que cuentan las instituciones presentes en el territorio a partir de la cartografía social. Para la segunda salida de campo se emplearon los perfiles de vulnerabilidad y generatividad propuestos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familia ICBF, con el fin de identificar las condiciones en que ocurre la cotidianidad de las familias californianas, así como la utilización de los recursos disponibles para afrontar situaciones generadoras de tensión.

La triangulación de la información construida a través de estas metodologías sumada a los análisis etnográficos generó una serie de datos que fueron sistematizados de la siguiente manera:

- Cartografía social: esta metodología se diseñó para generar discusiones reflexivas con respecto a los problemas, recursos y vínculos existentes en las instituciones públicas, privadas y comunitarias del territorio. Para ello se contó con la presencia de un miembro de cada una de las instituciones de la comunidad y se buscó la construcción del panorama institucional que existe en California. Estas discusiones fueron grabadas y transcritas de modo que se encuentran en los anexos investigativos. Adicionalmente, los mapas

construidos durante estas sesiones han sido digitalizados y analizados de forma particular y general.

Ilustración 1 Resultado de cartografía social referente a los recursos presentes en el territorio.



- Perfiles de vulnerabilidad y generatividad: esta herramienta planteada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue utilizada como medio para entablar conversaciones con las familias en espacios rurales y lograr identificar fuentes de tensión o conflictividad al interior de las familias. Se aplicaron a 9 familias habitantes del sector rural de California en 5 de las 6 veredas que componen el municipio. Estos perfiles fueron sistematizados y analizados de forma particular y general. Sin embargo, no fueron grabadas las conversaciones sostenidas con las familias debido a que en su mayoría se encontraban en

una posición de desconfianza al momento de entablar la conversación, por ello no dieron su consentimiento para el proceso de grabación.

Esta herramienta emerge a partir de la incorporación del paradigma de la complejidad aunada con la importancia de incorporar conversaciones solidarias con el fin de generar reflexiones constantes entre los actores involucrados en la investigación de las diferentes temáticas abordadas. El principio de esta herramienta es generar conversación de manera horizontal en las que las relaciones de poder que supone la posición de investigador e investigado es ineficiente y propone una nueva epistemología investigativa y de conocimiento.

- Etnografía: se utilizó el diario de campo como herramienta para el registro de información relevante para la investigación. Este diario de campo fue sistematizado y se encuentra en los anexos de la investigación.

Dentro de las consideraciones éticas investigativas se incluyó una explicación detallada de cada una de las técnicas utilizadas, así como de la metodología empleada en la investigación. A posteriori de este proceso, se respondieron inquietudes de todo tipo y en el caso de los perfiles de vulnerabilidad y generatividad se hizo entrega de un consentimiento informado con el fin de tener una conversación de forma transparente.

En el caso de esta investigación particular, con respecto a las practicas alimenticias de los habitantes de California y su seguridad alimentaria; fue fundamental enfocar el accionar etnográfico en espacios que cuentan con la interacción de modos productivos y agentes asociados a la cadena de producción y distribución de los alimentos en el territorio. Es por ello, que se dio prioridad a entablar conversaciones y ejecutar ejercicios de observación aguda con personas que

trabajan en las zonas rurales del municipio y cuya actividad laboral se relaciona en algún punto con la producción de alimentos y con los consumidores de los mismos, es decir todos.

En consecuencia, el siguiente texto se dividirá en tres capítulos interconectados; el primero de ellos se enfocará en un análisis crítico del modelo económico global y particularmente colombiano, en él se abordarán temáticas como el neo extractivismo, la seguridad alimentaria y la estructura estatal. El segundo capítulo se enfocará en el análisis de las practicas alimentarias de la comunidad californiana. Se trata de un análisis realizado en términos económicos, políticos y simbólicos de estas prácticas. Finalmente, el tercer capítulo se enfocará en un análisis del panorama referente a los riesgos relacionados con la seguridad alimentaria de los niños y jóvenes en este territorio como derecho fundamental y de existencia, se hará un análisis para comprender la forma en que estos derechos pueden ser inaccesibles para una cantidad significativa de la población debido a que entran en discordia con el paradigma económico que se impone en la actualidad y la forma en que las familias del territorio articulan sus esfuerzos para mejorar su calidad de vida.

Esta organización responde a una estructura simbólica en la que la intención final reside en crear un análisis de distintas dimensiones, este documento busca ser una especie de análisis en espiral, en el que todos los niveles se conjuguen constantemente y permitan al lector entender la manera en que las distintas dimensiones afectan la vida diaria de las familias que habitan en California, se debe resaltar que cuando se aborde el tema de la infancia y juventud del territorio, se evidenciara una tensión entre el discurso del desarrollo y el cumplimiento de los derechos humanos, particularmente los derechos del niño, pues se trata de discursos que en ocasiones chocan y en los que se impone en muchas ocasiones el interés privado sobre el bienestar comunitario. Se trata entonces de un análisis crítico y contextual de la forma en que las practicas alimenticias reflejan una serie de prácticas y políticas enfocadas en la reproducción de un modelo económico particular.

1. Historia minera

1.1 De santos, entierros y extranjeros en California

“Aquí desde siempre han querido explotar los extranjeros, pero no han podido, debe ser que el santo no los ha dejado” comentaba Carlos, un californiano conductor mientras recorría la zona rural de California, en el departamento de Santander. El santo al que hace referencia es San Antonio de Padua declarado como patrono del municipio, dicho santo de origen portugués y que se caracterizó por ser un asiduo viajero y evangelizador (Baron, 2015, p. 330). Como una parte significativa de los personajes históricos de la iglesia católica, en territorios americanos tienen una historia detrás de su llegada, una historia que se construye socialmente, esa historia que no busca continuidades o versiones unificadas de los hechos, sino que se construye en las permanencias e impermanencias. Una historia del pensamiento que “parece multiplicar las rupturas y buscar todos los erizamientos de la discontinuidad” (Foucault, La arqueología del saber, 2006, p. 8).

Esta historia cuenta con dos protagonistas, San Antonio y un hombre extranjero, que como todas las historias difiere en detalles, en lo que Foucault (2006) define como redistribuciones recurrentes: “no es la misma historia la que se hallará contada aquí y allá. Redistribuciones recurrentes que hacen aparecer varios pasados, varias formas de encadenamiento” (Foucault, La arqueología del saber, 2006, p. 6). Algunos californianos afirman que su procedencia era española, otros que se trató de un francés que portaba la imagen del santo y que durante el derrumbe de una mina rezó con tal intensidad a San Antonio para lograr evitar un futuro trágico, que logro encontrar una salida de la mina y permitió al extranjero vivir. Como recompensa de este acto, el extranjero debía enterrar la imagen del santo y no regresar al territorio.

Posteriormente, la imagen del santo fue desenterrada durante la exploración de una mina artesanal y allí es erigido un santuario que en la actualidad se ha convertido en uno de los referentes turísticos

del municipio. Se trata de un espacio en el que San Antonio se encuentra resguardado por una roca que lo protege en su encuentro con el niño Jesús. De allí, en algún momento la estatua es transportada a la iglesia del casco urbano. Sin embargo, parece que el santo mantiene una movilidad constante en la que alterna su estadía entre los dos santuarios, aun no es claro que motiva aquellos desplazamientos.

Ilustración 2 San Antonio de Padua en Santuario de California



En esta historia, existe una relación inversa a la que analizan Chertudi y Newbery en su texto *La Difunta Correa*, con respecto a la forma en que se santifican lo que denominan como “santos

populares”, ya que es a través del dolor, de una muerte trágica que se logra la santificación en la consideración popular y ella los convierte en referentes comunitarios.

“En la creencia en el poder que adquiere el alma de quien muere en forma trágica y, como en el caso de la Difunta Correa, luego de un profundo padecimiento, está presente la idea de elevación y de purificación a través de un sufrimiento intenso, no buscado sino sobrevenido, llegado de fuera; tal sufrimiento purifica” (Chertudi & Newbey, 1978, p. 122).

Sin embargo, en esta ocasión se trata de un personaje que para evitar este dolor “purificador” recurre a una figura ya santificada con el fin de evitar una suerte que se presupone fatal. De este modo, es el santo quien se convierte en la figura central de la historia y pasa a ser parte casi inherente del territorio. Ya que se trata de un tesoro en sí mismo, se trata de una conversión en lo que define Suarez Guava (2008) como “entierro” o “encantao” al estudiar la historia del español Juan Díaz (¿acaso será el extranjero de la historia?).

“un “entierro” o un “encantao” son equivalentes en términos de lo que producen en el mundo. Un “entierro” es una riqueza ocultada por algún rico y generalmente es oro. Un “encantao” es una figura de oro o dorada que tiene vida propia. Ambos elementos tienen la facultad de moverse. Ambos se pueden llamar tesoro o riqueza. Cuando se mueven, su desplazamiento se acompaña de “borrascas”. (Suarez Guava, 2008, p. 264).

Es allí, en la lógica de los entierros y las riquezas ocultas que acontece la vida en California, se trata de un territorio con riquezas naturales amplias y de personas que dedican su vida a la búsqueda de riqueza en las montañas, como escribe uno de sus líderes comunitarios: “somos roca, somos oro, realidad y fantasía. Soto Norte es agua y frailejón. También riqueza. Soto Norte soy yo

y aunque todos quieren ser... Nadie como yo podrá decir: Soy Santurbán...". Es que el oro en California no es solo un metal, se trata de un actor vivo alrededor del que se construye la vida de la mayor parte de sus habitantes, para los californianos no es solo una fuente de ingresos, sino que a partir de él se organiza una parte significativa de la vida, esto lo ilustra Buitrago al estudiar el municipio vecino de California: Vetás, sobre él comenta: "el oro —que es encantado— se encuentra en muchas lagunas que, dentro de la tradición oral de los vétanos y las vetanas, están vivas, son bravas y hacen llover y granizar" (Buitrago, 2012, p. 124) así como sucede en el caso analizado por Friedemann (1971) en las riveras del río Güelmambi en el departamento de Nariño, allí el oro se convierte en un articulador de vínculos familiares y organizador de la comunidad.

Pero ¿Qué relevancia tiene la historia de un santo portugués traído por un explorador europeo con el análisis de las prácticas alimenticias que se presentan en un territorio que concentra la mayoría de actividad económica en la explotación minera aurífera? Ya Levi-Strauss reconocía la importancia de entender la simbología contextual, de comprender las dinámicas propias de las sociedades para generar un entendimiento de su mundo. "no es posible estudiar dioses desconociendo sus imágenes, ritos sin analizar los objetos y sustancias que fabrica o maneja el oficiante, reglas sociales independientemente de las cosas que les corresponden" (Levi-Strauss, 1979, p. 16). En este sentido, esos objetos a los que se refiere el teórico francés pueden ser las figuras y las prácticas religiosas que se dan en California y que son parte fundamental de la cotidianidad, estas prácticas dan pistas de la forma en que se organiza la comunidad y por tanto de un sinnúmero de significados que serán abordados en esta investigación que sin duda no lograra plasmar la totalidad de ellos, pero que serán un buen acercamiento exploratorio.

Sin duda, el caso del extranjero que en su afán de conseguir riquezas y que ante su avaricia debió abandonar California de manera definitiva, dejando el oro enterrado junto a San Antonio tiene una

similitud significativa con la historia de las empresas extranjeras que han buscado instalar proyectos de explotación minera a gran escala en este territorio. Un nuevo relato encuentra su génesis en la llegada de una empresa canadiense llamada Greystar Resources Ltda en 2009 con un ambicioso proyecto denominado Angosturas en el que se buscaba la explotación de oro y plata que se encuentran enterrados en las entrañas del complejo paramuno de Jurisdicciones, Santurbán, Berlín; más conocido como paramo de Santurbán. Angosturas tenía como objetivo el establecimiento de un proyecto de explotación a cielo abierto.

“Se estimó que, durante los quince años de vida útil del yacimiento, la producción total de oro sería de 7,7 millones de onzas, con un promedio anual de 511 mil onzas (16 toneladas), y la producción de plata por año sería de 2,3 millones de onzas (72 toneladas)” (Göbel & Ulloa, 2014, p. 321).

A pesar de tratarse de un proyecto que en teoría generaría un impacto económico amplio a través de la generación de empleos directos e indirectos, se trata de un proyecto enmarcado en una contradicción de la política económica del país (se ahondara en este tema más adelante) en la que hubo una tensión al interior del modelo económico implementado por el gobierno de momento con un corte neo-extractivista (Lander, 2014) que se evidencio en el aumento meteórico de títulos mineros “En desarrollo de esta política, de un millón de hectáreas adjudicadas para minería en el año 2002 se pasó a 8,5 millones en el 2009 casi el doble de las utilizadas en actividades agrícola” (Molina, 2011) que encontró su contraparte en los movimientos sociales, comunitarios y ecologistas que buscan la protección de los páramos puesto que de ellos proviene el 70% del agua que abastece las grandes ciudades de Los Andes (Vasquez & Buitrago, 2011). Adicionalmente, se trata de ecosistemas cuya concentración en territorio colombiano es particularmente vital, ya que el 49% de ellos se encuentran distribuidos a lo largo del país (Molina, 2011).

Esta tensión entre la política económica del país y la conservación de los páramos desencadena una serie de manifestaciones en varios escenarios, tanto urbanos como rurales con especial convergencia en la capital del departamento de Santander (Bucaramanga) en lo que podría catalogarse como una muestra de aquello señalado como el ecologismo popular (Martinez, 2000). Producto de estas manifestaciones, en el mes de marzo de 2011 Greystar decide retirar el proceso de evaluación que había presentado ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial generando una cierta incertidumbre (sensación que perdura en una buena parte de la comunidad californiana) generalizada en las empresas mineras que desarrollaban proyectos en todo el territorio, pues encontraron un contexto social con el que no avizoraban un enfrentamiento tan álgido como termino siendo. De este modo el nuevo explorador extranjero, esta vez de procedencia canadiense (aunque en la actualidad es difícil saber si los capitales provienen de un lugar particular) debe abandonar California, dejando a su paso esta vez un proyecto de licencia ambiental enterrado y la idea de abrir las entrañas de las montañas.

Ilustración 3 San Antonio entre el agua y el oro (elaboración propia)



En 2011 surge un nuevo actor en la historia de la migración económica a California, durante este año la empresa conocida como Ventana Gold Mining es adquirida por la compañía AUX Canada Acquisition y cambia toda su denominación. Este nuevo visitante se enfocó en la compra de títulos mineros funcionales en el municipio y de allí empezó a apropiarse al menos del subsuelo y potencial de explotación que existe en el territorio de California. Durante la formulación de su plan de manejo ambiental AUX intento establecer una relación diferente con el territorio y aun se le recuerda como un representante del capital más “generoso”, pues produjo una cantidad significativa de trabajo a través del proceso de clausura de las minas activas que se ubican en los terrenos cuyos títulos mineros empezaron a pertenecerles.

Sin embargo, en un giro dramático de la historia que rodea a California, con bastantes similitudes a la de Juan Díaz (revisar Suarez Guava, 2008), el propietario de AUX (un magnate brasilero llamado Eike Batista) escudado en crisis económicas y deudas insostenibles, cede los títulos mineros adquiridos por su empresa al grupo empresarial Mubadala que en el año 2015 confirma la formación de la Sociedad Minera de Santander o MINESA. Se trata del más reciente actor de este reparto de extranjeros que han intentado extraer la riqueza mineral que se encuentra en las entrañas de las montañas circundantes de California. En este caso, se trata de un actor proveniente de los Emiratos Árabes Unidos cuya meta es lograr lo que no han podido lograr todos los extranjeros que han pasado por tierras californianas y que han encontrado en el páramo, las minas y la economía obstáculos para lograr extraer el tesoro enterrado.

Si se observara en retrospectiva el relato de Carlos, aquel californiano que comentaba el papel de San Antonio de Padua como protector de los mineros y la riqueza del municipio. Es allí, en esa cosmología particular que se hace posible encontrar una relación al menos llamativa entre el modo en que han avanzado todos los requerimientos de licencia de impacto ambiental de “la empresa”

(así es como se le llama a MINESA en el territorio) y las reformas que se están realizando en el santuario municipal, lugar donde habita San Antonio, así como las mejoras efectuadas en el parque central. Puede pensarse que se trata de una ofrenda a ese protector del municipio a ese santo que no permitió al primer extranjero de este relato extraer el oro de California.

Uno de los hitos más significativos en todo este relato se da el 10 de noviembre de 2017 cuando el presidente actual de Colombia Juan Manuel Santos firma un acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos para la donación de 45 millones de dólares para la implementación de los acuerdos (El Espectador, 2017, p. 5) del denominado posconflicto (algunos preferimos llamarlo post acuerdo). Curiosamente, al día siguiente se anunciaba la inversión de 1000 millones de dólares extra por parte del mismo Estado durante el proceso de explotación que se llevará a cabo en California (El Espectador, 2017, p. 4), dando por hecho que la licencia ambiental será aceptada y que la explotación será permitida. Más allá de juicios subjetivo (que tendrán espacio más adelante), todos estos acontecimientos sin duda pueden relacionarse si se analiza a partir de una visión estructuralista (Levi-Strauss, 1979) o desde una visión de la historia de larga duración (Braudel, 1970). Es que se trata de un actor extranjero (MINESA) en busca del tesoro enterrado en las montañas y el páramo que circundan a California (oro) y se han acercado al santo (el apellido Santos del presidente no es inocente en este juego de relaciones) protector para pedir su aprobación (reparaciones a la iglesia). Ahora, el interrogante que permanece en los californianos y en este investigador es ¿el santo permitirá a MINESA desenterrar ese tesoro que han venido a buscar desde siempre los extranjeros en las montañosas tierras californianas? Por ahora, Santos ha dado su aprobación.

Es ahora, en tiempos del postmodernismo (Navarro, 2002), post-estructuralismo (Giddens & Turner, 1998), postcontractualismo (Santos B. D., 2004) y neoextractivismo (Lander, 2014), que

una empresa minera, un consorcio árabe llega a un municipio con nombre extranjero que sin duda hace pensar en la fiebre del oro y en la búsqueda de El Dorado que ocurre este relato, puede que se trate de un relato especulativo o poco “representativo”, pero se trata de lógicas culturales que sin duda construyen la realidad de quienes habitan en California y que tienen vital importancia si se quiere conocer la construcción de la realidad que se da en este territorio, es pues una de las múltiples ontologías o realidades (Escobar, 2015, p. 16) que existen y es allí, en una intersección de conocimientos y tradiciones que se desarrollara esta investigación.

1.2 Extractivismo y alimentación

Para conocer el modo en que se construyen las prácticas alimenticias en un contexto tan particular como California vale la pena comenzar por un análisis del contexto general en el que ocurre el devenir económico y político de las familias que habitan allí. Por ello, se propone partir de un análisis casi sistémico de la forma en que la política extractivista se relaciona con la producción de alimentos en los países de Latinoamérica, ya que esta postura política/económica construye en muchos sentidos el macro contexto en el que ocurre la cotidianidad de las familias californianas.

Al acercarse a las siete tesis equivocadas sobre América Latina que escribe Rodolfo Stavenhagen, la primera de ellas consiste en analizar si “los países latinoamericanos son sociedades duales” (Stavengahen, 1981, p. 15). Esta tesis resulta llamativa dado que surge a partir del rol que tienen la academia, los medios de comunicación y las instituciones públicas constituidas sobre una concepción de las sociedades latinoamericanas formadas a partir de clases sociales opuestas en constante contradicción y tensión (recuerda la dialéctica marxista clásica). Sin embargo, la lucidez de este autor se encuentra en comprender y decodificar la forma en que lo que define como sociedades “arcaicas” y “modernas” cohabitan en territorios comunes y no se encuentran en esferas de vida opuestas o contrarias, sobre ello el autor afirma. “Las regiones subdesarrolladas de nuestros

países hacen las veces de *colonias internas*, y en vez de plantear la situación en los países de América Latina en términos de "sociedad dual" convendría más plantearla en términos de *colonialismo interno*". (Stavengahen, 1981, p. 17).

Este colonialismo interno hace referencia a comunidades relacionadas con la tierra y que, en términos de cobertura de necesidades básicas, así como efectividad de instituciones públicas se encuentran alejados del centralismo que se impone en naciones como Colombia. Sin embargo, estas comunidades se encuentran interconectadas de modo simbiótico, pues en términos económicos, políticos y sociales dependen entre sí para asegurar la reproducción de una categoría que se ha naturalizado alrededor del mundo: El desarrollo (Wallerstein, 2005) (Escobar, 2007).

La noción de desarrollo ha despertado una cantidad considerable de debates con respecto a que significa y como ha sido naturalizada por parte de las comunidades alrededor del mundo. Uno de los principales exponentes en este debate, Arturo Escobar define al desarrollo como una ideología que ha sido aceptada e implantada por parte de las elites que dirigen los países más pobres (en donde se encuentra Colombia) y cuya premisa fundamental es "la transformación total de las culturas y formaciones sociales de tres continentes de acuerdo con los dictados de las del llamado Primer Mundo" (Escobar, 2007, p. 13). Esta ambiciosa meta al igual que los objetivos del milenio en realidad han incrementado las brechas existentes entre las personas más vulnerables y las más ricas, con un gran aliciente y es el hecho de que, al ser naturalizado el discurso desarrollista en las comunidades, se cree que es este el medio para mejorar las condiciones generales y no el factor desencadenante en el aumento de la desigualdad. Una de las banderas que iza el discurso del desarrollo es la creación de empleos que generarían una sociedad equitativa en la que la competencia entre trabajadores sería el motor que permitiría generar bienestar. Sin embargo,

Forrester (1999) define esta como una sociedad desaparecida en la que es fundamental analizar no solo el papel del empleo, sino de la ausencia del mismo como un mal sistémico.

“Se imprime a las actividades económicas, políticas y sociales un rumbo oficial basado en esta carrera de fantasmas, esta invención de sucedáneos, esta distribución prometida y siempre postergada de lo que ya no existe; se sigue fingiendo que no hay impasse, que se trata solamente de pasar las consecuencias malas y transitorias de errores reparables.” (Forrester, 1999, p. 15).

Esta falacia de una sociedad basada en la competencia y el empleo como medios generadores de capital ha producido una serie de consecuencias, que, sin duda pueden ser atribuidas al éxito con el que se enraizó el discurso del desarrollo en la sociedad global. Esta transformación total de las culturas de la que habla Escobar ha llevado a lo que Sassen (2015) denomina como “expulsiones”: esas expulsiones no son espontaneas, sino hechas. “Los instrumentos para hacerlas van desde políticas elementales hasta instituciones, técnicas y sistemas complejos que requieren conocimiento especializado y formatos institucionales intrincados” (Sassen, 2015), estas expulsiones se reflejan en fenómenos como los que aborda Fajardo (2002) al referirse al éxodo de las comunidades campesinas a los centros urbanos del país, se trata de sistemas de acumulación que dejan sin lugar a una parte considerable de la sociedad.

La ideología del desarrollo utiliza como plataforma un sistema económico particular que es claramente funcional para su discurso y da a luz una categoría que parece abarcarlo todo, pero que en realidad se basa en la exclusión del otro. La globalización, esta categoría parece ser erigida como la única opción para la entrada de las comunidades a el sistema mundo analizado y categorizado por Wallerstein (2005) y cuyo eslogan extraído de la campaña política de Margaret Thatcher es una muestra de su potente lenguaje “There’s No Alternative, en español: No Hay

Alternativa”. No hay alternativa, porque como comenta Harvey, para que este sistema triunfe debe darse un giro a las prioridades del Estado, “uno de los principios básicos que quedaron sentados en los setenta fue que el poder del Estado tenía que proteger las instituciones financieras, costara lo que costara” (Harvey, 2009, p. 113), esta protección es lo que ha desencadenado en despidos masivos alrededor del mundo, masas de ciudadanos especializados pero con pocos empleos y sistemas de salud, pensión y educación privatizados. Desencadenando en expulsados alrededor del mundo que ante su imposibilidad de ingresar al sistema productivo buscan ayuda en el Estado, pero este ha realizado un viraje en su foco de atención, dando paso a lo que algunos pensadores han denominado como el Post-Contractualismo (Santos B. D., 2004), que es el fin del contrato social pregonado por Rousseau y cuyos alcances aún son difíciles de vislumbrar, pero que sin duda ha generado una demanda amplia a las familias alrededor del mundo.

En consecuencia, con el fin de reproducir el modelo desarrollista difundido es necesario que se generen relaciones de vinculación vertical y de poder (Foucault, 2012), en la que las comunidades subalternas en términos de Boaventura de Sousa Santos (Santos & Garavito, 2007) parten con una desventaja, pues su explotación y silenciamiento es fundamental para que las comunidades hegemónicas o imperantes reproduzcan su autoridad.

Como lo analiza Escobar (2007), la naturalización del desarrollo como una categoría dada y el establecimiento de la misma como estrella guía de las políticas nacionales se ha convertido en una generalidad y cuyos efectos más notorios se evidencian en los países latinoamericanos. En estos territorios se ha formado una percepción de comunidades que no han sido insertadas en su totalidad a los ideales del desarrollismo, a las que se les concibe como lo que Levi-Strauss (1979) califica como sociedades frías. Es decir, espacios estáticos en los que la acumulación de capital y tecnificación de las practicas productivas son vistas como un escenario lejano y en las que las

sociedades “calientes” o los grandes cúmulos de capital materializados en espacios urbanos de alta densidad poblacional y control deben intervenir para llevar la “luz del desarrollo” a estas comunidades o lo que Han define como sociedad del rendimiento (2012).

Esta sociedad del rendimiento ubica como epicentro el trabajo y la autoexplotación en una nueva sociedad que se hace posible a través de la explotación constante de los recursos naturales o lo que Svampa (2013) define como la convención de commodities y que por más abstracto que pueda parecer se ve reflejado en la incertidumbre que se vive en California.

Se trata ni más ni menos que del ejemplo de la lucha dialéctica que se describió anteriormente. En otras palabras, la cotidianidad de las familias que habitan en este territorio es construida a partir de la tensión generada entre la postura económica en la que se ha insertado el Estado colombiano y los modos de producción que se han desarrollado en el contexto, esta contradicción se da con respecto a dos temáticas particulares. Una es la dependencia de la explotación de recursos naturales y la otra la noción de seguridad alimentaria presente en Colombia.

La seguridad alimentaria surge como categoría relevante durante la formulación de los Objetivos del Milenio (Friant, 2016) al evidenciar un escenario de profunda desigualdad social y notorias brechas en la distribución de riquezas sumadas a la condición de vulnerabilidad en la que se encontraban millones de personas en aquellos países en “vía de desarrollo”. Uno de sus ejes más significativos planteaba como meta el reducir la desnutrición global al menos hasta el 12% de la población mundial para el año 2015 (De Schutter, 2014). Con el fin de cumplir esta meta se propuso una metodología enfocada en utilizar la industrialización de los países más pobres como medio para generar mayor acceso a la oferta de alimentos a través de la obtención de riqueza proveniente especialmente de la explotación de recursos naturales.

“La intensificación de la actividad industrial es necesaria para poder dotar a los países en vías de desarrollo y a su población de capacidades más equitativas a fin de lograr en la prontitud del tiempo el anhelado desarrollo, elevando los indicadores de desarrollo humano y reduciendo el surgimiento de desafíos globales como consecuencia de la inequidad y pobreza estructural, tales como las actividades de narcotráfico, tráfico de armas y otros crímenes asociados a la necesidad de incrementar capacidades económicas” (Gonzalez & Valdivia, 2017, p. 151).

Sin embargo, esta estrategia no solo no cumplió su finalidad como medio para asegurar el mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos globales, sino que ha sido un medio para aumentar la brecha entre países ricos y pobres. En términos del acceso a la comida, se trata de una problemática en aumento, puesto que la cantidad de personas que no tienen acceso constante a comida o a comida adecuada ha aumentado “alrededor del 14% de la población mundial sigue sufriendo de desnutrición, mientras que alrededor del 29% todavía sufre de malnutrición” (Friant 2016, p 218). Es por esto que se hace necesario definir qué se entiende por seguridad alimentaria y de este modo buscar alternativas para aumentar su cobertura a nivel global.

Es fundamental una visión amplia de la categoría y entenderla como algo que va “más allá de la simple producción de alimentos, pues ésta abarca aspectos de tipo cultural, nutrición, salud, distinción y gustos, soberanía alimentaria y sociabilidad” (Torres Oregon, Herrera, Vizcarra, & Lutz, 2015).

Es en esta reflexión sobre lo que supone la seguridad que se han realizado bastantes debates. Sin embargo, varios debates teóricos coinciden en pensar la seguridad alimentaria como “acceso seguro y permanente de hogares a alimentos suficientes en cantidad y calidad, para una vida sana y activa” (Maxwell & Frankenberger, 1993). Sin embargo, al llevar esta noción al accionar

cotidiano del sistema económico, es notoria la forma en que la lógica del sistema neoliberal hace inaccesible una cantidad significativa de productos alimenticios debido a un método volátil de determinación de precios, alejando los productos alimenticios de los consumidores con ingresos más bajos. Este proceso es analizado por Friant y afirma que:

“La especulación en el mercado financiero y la liberalización del comercio de productos alimentarios ha llevado a una situación en la que los precios de los alimentos son artificialmente altos e inestables. Los biocombustibles son también una de las principales razones para esta volatilidad y han sido responsables de hasta el 75% del reciente aumento de precios de los alimentos” (Friant, 2016, p. 218).

En el caso de Colombia, esta liberación del comercio ha golpeado significativamente la producción agropecuaria, debido a que como analiza Darío Fajardo, esta dinámica ha creado entre otras “el aceleramiento de la desagriculturización, el aceleramiento de las migraciones internas rural-urbanas y rural-rural en el país, la disminución de áreas sembradas, la recomposición de la producción agrícola en términos de reducción de cultivos temporales y la ampliación de cultivos permanentes” (Fajardo, 2002, p. 11). Estos cambios sumados al aumento de la acumulación de tierras por parte un grupo reducido terratenientes y empresas privadas generan el aumento sostenido en los monocultivos y el bajo acceso a la tierra por parte de campesinos. La convergencia de los factores develados por Fajardo (2002) y algunos más afectan directamente la oferta de alimentos que son producidos al interior del país y que en economías neoliberales suele intervenir a través de la llegada de productos importados. Esta lógica, sin duda afecta el acceso a la canasta básica por parte de quienes se encuentran en los sectores más vulnerables de la sociedad, esto es lo que define Dehollain (1995) como inseguridad alimentaria crónica, puesto que

pone en peligro el acceso a alimentos de los mismos productores debido a que tiende a generar una especialización masiva de los terrenos productivos que en muchos casos se enfocan hacia una producción que genere más capital, pero que no necesariamente son productos consumibles (como el caso de la palma de aceite). Producto de esta dinámica son provocadas las tres formas de inseguridad alimentaria en las comunidades urbanas y rurales:

“digamos que la (in)seguridad alimentaria es crónica entre familias de pobreza extrema, es decir, aquellas que no ganan lo suficiente para cubrir el costo de una canasta básica de alimentos. Es transitoria entre familias donde el principal generador del ingreso en el hogar queda desempleado, y es cíclica entre familias rurales durante algunas épocas del año alejadas de la cosecha” (Dehollain, 1995, p. 7).

Ahora bien, la seguridad alimentaria y la forma en que esta puede ser puesta en peligro por las acciones derivadas de la explotación minera y particularmente la minería aurífera son abordados en los estudios realizados por Rodríguez y Van der Hammen (2012) y Verschoor y Torres (2015) llevados a cabo en la Amazonia colombiana, puesto que se evidencia el modo en que la dedicación de la mano de obra indígena que habita esta zona del país ha dejado de lado la producción de alimentos que eran fundamentales en la dieta de las familias Andoque, este cambio en la cotidianidad impacta una buena parte del capital obtenido por las labores mineras se destina a la compra de alimentos que en otros momentos eran básicos en las “chagras” familiares.

“En la medida en que se han pausado las actividades agropecuarias por la actividad minera, se ha podido evidenciar que el número de productos clave es cada vez

menor. Tanto así que el consumo de alimentos procesados y empacados en latas se ha comercializado en grandes proporciones” (Verschoor & Torres, 2016, p. 82).

Esto sin duda afecta la oferta de alimentos disponibles para todos los miembros de las familias que se introducen en actividades económicas relacionadas con la explotación minera. Siendo este sector de la economía una de las banderas de lo que Lander (2014) ha llamado neoextractivismo. Este fenómeno se basa en la re-primarización de las economías latinoamericanas enfocándose en la explotación de materias primas, especialmente recursos no renovables. Esta visión económica se materializa claramente en la doctrina económica del gobierno Santos, que ha denominado “locomotoras” del desarrollo económico a cinco renglones de la economía (minería, vivienda, agricultura, innovación e infraestructura), en los que la minería se lleva sin duda alguna el foco de atención. “El nuevo {consenso de commodities} conlleva la profundización de la dinámica de desposesión o despojo de tierras, recursos y territorios y produce nuevas y peligrosas formas de dependencia y dominación” (Svampa, 2013, p. 32).

Es entonces posible pensar que la seguridad alimentaria es el acceso constante a una alimentación adecuada que es producida de acuerdo al contexto en el que se desenvuelve la cotidianidad de las comunidades. Sin embargo, este acceso se encuentra mediado por las dinámicas económicas que se desarrollan global, nacional y localmente, esta lógica en muchos casos crea tensiones entre los modelos productivos en zonas de explotación minera y agraria, ya que se presentan resistencias de carácter dialectico por sus características casi opuestas con respecto a la tenencia de la tierra y la utilización de recursos naturales como el agua. Esto se refleja en el caso de California de manera evidente al analizar la forma en que se ha dividido el territorio de forma casi binaria entre agricultores y mineros. En este sentido, cuatro de las seis veredas que componen el municipio se encuentran vinculadas a labores relacionadas con la minería y las dos restantes están compuestas

por familias de agricultores que realizan la mínima producción que se genera en el territorio, cuya destinación es casi exclusiva al autoconsumo y solo una pequeña fracción de la producción llega al mercado, la mayor parte de la oferta alimentaria proviene de municipios cercanos como Charta y Surata o ciudades intermedias como Pamplona y Bucaramanga.

El sector agropecuario de California se encuentra restringido a las veredas Pantanos y Santa Úrsula, en estos espacios la producción alimenticia se enfoca en la producción de productos lácteos, tubérculos como yuca, papa, verduras como lechugas, tomates y vegetales. Sin embargo, la mayor parte de estos productos se destinan al autoconsumo de las familias que habitan en esta zona del municipio. Mientras que las cuatro veredas faltantes cuentan con una dedicación laboral casi exclusiva a la explotación minera ya sea a través de la vinculación laboral con alguna de las empresas mineras presentes o ya sea en la explotación artesanal (barequeo) o en la intrusión ilegal a terrenos cuya licencia de explotación pertenece a las empresas explotadoras del municipio (galafardeo), debe aclararse que estas prácticas se realizan de manera casi exclusiva y las familias mineras en su generalidad no tienen conocimientos con respecto a prácticas agropecuarias, se trata casi de posiciones opuestas.

1.3 Entre el campesino y el minero

“Las familias que están en la agricultura que tienen ganadería seria e digamos habría una diferencia en esto de la buena vida que ustedes dicen que se ve acá ósea digamos se ve eso como no tan buena vida allá en ese sector de los agricultores” (Ver anexos)

Esta frase pronunciada por uno de los líderes sociales más importantes de California permite conocer un poco el imaginario social existente en el territorio no solo de las familias que se desempeñan en labores agrícolas, sino también del imaginario creado alrededor del minero. En efecto, al conversar sobre el quehacer y la vida del minero suele expresarse una especie de alegoría

con respecto al modo en que la explotación de este mineral es una fuente de bienestar económico, abundan las historias con respecto a la forma en que largas estancias en los socavones generan riqueza (Buitrago, 2012).

Es que en California la minería es la forma más efectiva e inmediata para generar dinero, esta se divide en tres tipos que han sido documentados con anterioridad (Göbel & Ulloa, 2014) (Buitrago, 2012). La minería formal realizada a través de empresas o asociaciones mineras y en espacios reglamentados con licencias ambientales adquiridas de forma legal, el barequeo que se realiza en las riberas de los ríos. Actividad en la que la utilización de herramientas sencillas es la generalidad y cuyo impacto en el flujo de los ríos y quebradas no es significativo y el galafardeo que en el caso de California se trata de la entrada en terrenos cuyos títulos pertenecen a otras personas o empresas y allí extraer “maletas” de rocas cuyo procesamiento se realiza en talleres artesanales ubicados a lo largo del río Surata que marca el camino de las veredas La Baja, Angosturas, Cerrillos y El Centro. Estos tres tipos de minería se realizan de forma sincrónica en todo el municipio, pero cada una de ellas produce un tipo de riqueza distinta. La minería formal generalmente tiene como intermediario a una empresa foránea (como Minesa) que genera empleos formales y cuya paga no suele ser equiparable a la que accede un minero artesanal o un galafardo. Sin embargo, se trata de empleos apetecidos, pues se trata de una entrada al régimen contractual en el que la explotación minera va acompañada de seguridad social y beneficios poco comunes en los demás sistemas de explotación.

El barequeo se trata de una actividad que demanda gastos energéticos de mayor intensidad, pues requiere de esfuerzos físicos considerables y que articula a grupos familiares enteros. Sin embargo, el galafardeo es tal vez la actividad más peligrosa, demandante de esfuerzo y común en la comunidad (a diferencia del caso analizado en Vetas por Buitrago, 2012) californiana. Se trata de

la entrada en socavones formados a través del trabajo acumulado de generaciones de mineros que construyen “galerías” en las que a través de utensilios de todo tipo que incluyen explosivos, taladros mecánicos y algunos más, se dedican a extraer rocas en cuyo interior se encuentra el anhelado metal.

Tabla 1 Tipos de minería discriminados por descripción y vigencia

tipos	Descripción	Vigencia
Barequeo	Llevado a cabo en las riberas de los ríos Salado, y la quebrada del Volcán principalmente. Además, a veces se solicitaba permiso para barequear al lado de los molinos de las minas.	Prácticamente ya no se realiza. Frecuencia muy baja
Minería de Arrastre	Recolecta de piedras que pueden tener oro y se muele en la casa. Estas piedras son recogidas del río o se pedía permiso a las empresas artesanales para pelusiar, es decir, buscar entre el material que la empresa descartaba por tener poco oro.	Al disminuir la cantidad de empresas mineras, también se ha reducido la minería de arrastre. Actualmente es poco frecuente.
Galafardeo	Extracción ilegal en los socavones de las minas, es decir, se extraen piedras con chispas de oro para luego llegar a moler en casa. existen dos formas: entrando por la entrada del socavón de noche, sin que los socios, familias por lo general se dieran cuenta o abrir huecos para romper dentro de los socavones	También ha entrado en crisis con la venta de las pequeñas empresas y el aumento de la seguridad.
Minería Artesanal	Minería con poca tecnificación (utilización de molinos de pisonés, mesas de concentración) una producción baja de oro en comparación con las empresas multinacionales. Funciona como un grupo de socios que contratan obreros con vinculación directa a la empresa.	Actualmente en crisis. De las 14 que existían a inicios del s. xxi. Hoy sólo quedan 4. La mayoría han vendido a empresas multinacionales.
Minería Rustica	Minería sin ningún tipo o poca de tecnificación, se realizaba a la luz de las velas o de lámparas de carburo, sin carretillas ni gran maquinaria. Antecesora de la actual minería a pequeña escala o artesanal.	Actualmente no existe. Fue común hasta mediados del s.xx

(Buitrago, 2012, p. 39)

Estas actividades generan un flujo de capital importante en California ya que no solo producen empleos directos en los diferentes espacios de extracción, sino también en los talleres artesanales mencionados con anterioridad. Pero, en la esquina opuesta, los pocos agricultores del municipio dedican la mayor parte del tiempo al cultivo y cuidado de alimentos y en algunos casos a la ganadería, lo que genera la entrada de capital a través del procesamiento de alimentos como queso, leche y carne. Sin embargo, la mayor parte de los alimentos cultivados (yuca, papa, legumbres y vegetales) se destinan al consumo de estas familias y al intercambio entre las familias que habitan las veredas agrícolas. Se trata de una actividad que involucra en la mayoría de las ocasiones a todos

los miembros de la familia. En esta relación casi opuesta y dialéctica se hace necesario comprender las acciones y las creencias cotidianas que involucran el quehacer de ambas comunidades que encuentran un espacio de convergencia en este territorio.

Por parte de quienes se dedican a la minería en cualquiera de sus formas se concibe al dinero recolectado como un bien pasajero que es gastado casi de forma inmediata al ser adquirido. Parece ser un bien efímero cuya destinación suele estar enfocada a la adquisición de bienes tecnológicos y en algunos casos a bienes inmuebles en lugares como Bucaramanga. Sin embargo, vale la pena preguntarse la razón por la que se genera esta destinación de capital. En primer lugar, parece existir en el sistema cultural contextual una concepción del oro como una fuente de avaricia en la que su regulación debe tener unos límites difusos pero que de no existir parece condenar a quien excede estos niveles de avaricia. “soy un minero, la vida vivo arriesgando, ya que los gases son bastante traicioneros. Por eso tomo y me encantan las mujeres y si me muero es lo único que me llevo” (Acevedo, L. 2010 Soy un minero. Grabada por)

Mientras las familias agricultoras son vistas como grupos en una condición subalterna (Bustos, 2002) y cuya noción de “buena vida” es completamente opuesta, ya que el dinero proveniente de su trabajo en la mayoría de ocasiones se destina al mejoramiento de las tierras que son trabajadas, así como en la reinversión de productos alimenticios. Se trata de una posición casi adversa en todo sentido, pues mientras la agricultura se trata de una actividad cíclica en la que los productos cultivados pueden ser producidos una y otra vez, mientras la explotación minera se basa en la extracción única y no renovable del metal. Se trata de una materia efímera y por tanto su riqueza derivada lo es también, mientras que la concepción de la tierra por parte de las familias agricultoras da mayor relevancia a la maximización de la utilidad de la tierra, por ello la importancia de la propiedad de la tierra y su riqueza suele ser puesta a disposición de la tierra de nuevo.

En este factor es donde radica una de las grandes diferencias entre los barequeros y los galafardos con los agricultores, pues para aquellos que se dedican a labores agrícolas el principal activo es la posesión de tierras con el fin de reproducir su actividad cotidiana, mientras para los mineros su posesión más preciada son sus herramientas y medios para explotar los socavones. En este caso, la posesión de tierras es apenas algo anecdótico, pues su riqueza no yace en sí en la tierra superficial, sino en las entrañas de la tierra y por ello la plusvalía de sus tierras no radica en el suelo, sino en el subsuelo. En cierta medida se trata del fetichismo de las mercancías analizado por Marx (2000) de forma clara, pues en la producción del oro las relaciones sociales que subyacen su producción son ocultas, mientras que en un sistema urbano de consumo de alimentos la proveniencia de estas mercancías se ha convertido en un valor agregado central en lo que Esquivel (2015) define como la “consumo cultural”, en ello la forma en que se produce cada alimento, así como las materias utilizadas en su cultivo son de interés general por parte de los consumidores. “Estamos entrando a una nueva fase humana radical donde todo tiende hacia el aplanamiento, la estandarización, la personalización predeterminada, la caducidad, el frenesí consumista” (Esquivel, 2015, p. 65)

Para quienes se vinculan a las labores mineras parece existir una prioridad por el control del subsuelo más que la propiedad en sí de la tierra, pues su interés se encuentra en la capacidad de ingresar a los espacios donde se encuentra el mineral y a partir de allí explotar la utilidad que ya está en el terreno, mientras que el interés de las familias agricultoras yace en el control de la tierra (Fajardo, 2002) y por tanto de lo que está en terreno, ya que su interés está ligado a la producción y es producido de forma cíclica.

Ahora bien, en el caso de California no existe una relación lineal entre la oferta de alimentos y la demanda, puesto que se trata de un mercado atravesado por la existencia de intermediarios que

abastecen el municipio a través de la llegada de camiones cuyos alimentos provienen en su mayoría de la ciudad de Bucaramanga, así como de algunos municipios vecinos como Charta (gran productor de cebolla) y Surata (productor de tomates), de allí que las comidas generalmente contengan guisos creados a partir de la mezcla de estos dos ingredientes. La existencia de estos intermediarios no permite una conexión fluida entre productores de alimentos californianos y los demás habitantes, ya que la mayoría de los intermediarios provienen de otros lugares. Por tanto, su relación con las familias campesinas californianas es mínima y aumentan el precio de los alimentos debido a costos indirectos, lo que viola los principios básicos del Fairtrade (Friant, 2016).

A esta suma de factores debe adicionarse las condiciones de inaccesibilidad de las veredas agrícolas del municipio y que se encuentran demarcadas de manera evidente en el punto donde se construye en la entrada del municipio y que más allá de la comunicación más efectiva con toda la región de Soto Norte, evidencia la forma en que el foco de interés no radica en la comunicación de estas veredas agrícolas con el municipio, sino que se trata de optimizar las vías de comunicación que permiten la salida del oro californiano a otros territorios.

Es en este paralelo existe una doble contradicción con respecto a la forma en que se concibe el futuro del territorio, por una parte, se busca generar una explotación prolongada de recursos naturales no renovables en la que el capital extranjero parece tener prioridad debido a que se erige como el único que puede cumplir con los requisitos impuestos alrededor de la autorización estatal (Camargo Sierra & Hurtado Tarazona, 2011). De esta explotación se busca generar la articulación de una parte significativa de la comunidad con el proyecto y de este modo asegurar una entrada constante de capital a los mismos (Güiza , 2013). Sin embargo, no existe claridad con respecto a métodos para mejorar la capacidad institucional en el territorio, así como métodos para evitar que

exista una sobredemanda de la comunidad al sector privado o una suplantación del Estado por parte del sector privado (Valdez, 2007).

Adicionalmente, se espera la utilización de estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de los californianos. Sin embargo, con respecto a programas que mejoren las condiciones de las familias agricultoras, así como asegurar que la entrada de alimentos no aumente sus costos al comenzar la explotación de oro no existe un enfoque claro, por lo que valdría la pena preguntarse si realmente existe un interés explícito o se trata de una pantomima estatal.

Sin embargo, al trascender esta visión dialéctica entre las comunidades campesinas y mineras es importante comentar el puente conector entre estos grupos sociales. Aquello que es elemento transversal y que rige la cotidianidad en el territorio, se trata del recurso que articula a las familias californianas con los movimientos ecologistas y los debates legislativos del país. El agua, en este territorio ubicado en la entrada del Páramo de Santurbán se vuelve un activo esencial para todos los grupos ya sean mineros o agricultores, ya que es el medio fundamental para la producción de riqueza a través de la explotación de la tierra en cualquiera de sus formas, como lo evidencia Buitrago al analizar la concepción del agua en Vetás (municipio vecino a California y ubicado en el sistema de Paramo):

“Son los habitantes del municipio, de manera individual o a través de juntas de acción comunal los que se han apropiado y han administrado el agua. Así de manera de acuerdos implícitos o explícitos, se han demarcado zonas diferenciadas del uso del agua” (Buitrago, 2012, p. 83)

Estos usos del agua, Sin embargo, se ven afectados por la forma en que prácticas como el galafardeo han florecido a partir de la llegada de Minesa, pues al bloquear una parte significativa de los accesos a las minas explotadas con anterioridad se ha hecho evidente la cantidad de agua

que es llevada a las minas y los molinos de procesamiento existentes. Esto produce que el control sea cada vez más complejo y derive en casos de disminución en la presión y calidad de agua que llega a algunos hogares.

1.4 Postura económica de Colombia

Como se mencionó con anterioridad a partir del posicionamiento del gobierno Santos, dando continuidad a una posición política implementada desde el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) como representante del “nuevo liberalismo”, Colombia ha buscado insertar su economía en el modelo neoliberal (Hurtado, 2011). En este sentido, ha buscado mejorar el crecimiento económico a través de tres puntos fundamentales: la explotación de ventajas comparativas, la urbanización de la población y el “adelgazamiento” del Estado.

“A partir de la década de los 90, los gobiernos han defendido e implementado la idea de que Colombia puede ser un país próspero y moderno con base en una democracia participativa asentada sobre una economía en permanente crecimiento gracias a los flujos de IED en sectores intensivos en capital como la minería. Fue este el discurso con ligeras variaciones de Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe. El presidente Juan Manuel Santos no plantea una ruptura con esa idea” (Hurtado, 2011, p. 15)

Por explotación de ventajas comparativas se entiende la utilización de los recursos particulares concentrados en países en “vía de desarrollo” como fuente principal de financiación y generador de empleos formales (CEPAL, 1990). Esta posición tiene una relación cercana con la convención de commodities (Svampa, 2013) puesto que genera una dependencia notoria de los mercados internacionales que determinan los precios de mercancías como el petróleo y el oro. “Un país exportará los bienes en cuya producción se utilizan de modo intensivo sus recursos relativamente

abundantes, e importará productos que utilizan con intensidad sus factores relativamente escasos”
(CEPAL, 1990, p. 15)

En concordancia, esta lógica requiere la articulación del capital privado como explotador de los recursos, pues se parte de una premisa fundamental: los mecanismos estatales se erigen como obstáculos para el ejercicio de la libertad y el único modo de asegurar el ejercicio de ella es a través de la delimitación del Estado (Friedman & Friedman, 1983). Esta visión va en concordancia con una disminución notoria del poder estatal, pues se hace necesaria la eliminación de este como garante de condiciones mínimas.

Ello se refleja en el aumento de condiciones favorables para los inversores extranjeros en lo que se ha denominado en el discurso político colombiano como “confianza inversionista”, se materializa en la disminución de tasas impositivas a los grandes capitales, la disminución de garantías contractuales que deben ser aseguradas por los contratantes, la masificación de los contratos “por prestación de servicios” que se trata de la absolución de obligaciones entre contratantes y contratados, el mantenimiento de salarios bajos para competir con otros países de la zona y la reducción de injerencia estatal en sectores como la salud y la educación a través de figuras intermediarias como los colegios concesionados y las Entidades Prestadoras de Salud (Hurtado, 2011).

La defensa de la libertad requiere la eliminación, en la medida de lo posible, de esas concentraciones de poder, y la dispersión y distribución del poder que sea imposible eliminar —un sistema de pesos y contrapesos—. Al hacer que la autoridad política pierda el control de la actividad económica, el mercado elimina esa fuente de poder

coercitivo. Así, la fuerza económica actúa de contención del poder político y no de refuerzo (Friedman & Friedman, 1983, p. 446).

Estas condiciones han hecho que la población colombiana tenga un proceso de urbanización (Romero, 2010) dejando el campo en manos de un porcentaje mínimo de propietarios cuyo foco no se halla en la producción de alimentos en pequeña escala, sino que asignan mayor relevancia a los agronegocios (Yacoub, Duarte, & Boelens, 2015). Este proceso de urbanización contó con un potente acelerador. El conflicto armado, que ha afectado a 4'629.190 personas de acuerdo al Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (SISDHES), en su mayoría provenientes de contextos rurales y que se han desplazado a los centros urbanos huyendo de los diferentes actores que han sido útiles para la concentración de tierras en manos de pocos propietarios.

“Por otra parte, las decisiones políticas sobre las tasas de interés y cambiarias, y en conjunto, la sobreprotección brindada por el Estado al sector financiero, han confluído con la concentración de la propiedad y las consiguientes rentas monopólicas de la tierra, para generar una agricultura no competitiva, con limitaciones en sus articulaciones con sistemas eficientes de procesamiento agroindustrial y comercialización” (Fajardo, 2004, p. 72)

Estos factores han llevado a que el sector rural de Colombia se especialice en la producción de dos tipos de mercancías particulares, en el sector agropecuario la producción de materia prima para biocombustibles como caña de azúcar y palma de aceite (Yacoub, Duarte, & Boelens, 2015) y en el sector extractivo la explotación de recursos naturales no renovables como petróleo, carbón y metales preciosos (Hurtado, 2011) describiendo perfectamente la categoría de neoextractivismo desarrollista (Svampa, 2013). Todo este cambio en el sistema económico colombiano tiene como

premisa de funcionamiento la denominada teoría del goteo: “es decir la idea de que el crecimiento económico redundará, tarde o temprano, en progreso social” (Guillen, 2014), En el caso particular de Colombia, esta teoría ha resultado equivocada ya que la excesiva dependencia de estas actividades sumadas a la incapacidad estatal para controlar los factores externos que determinan los precios de estas mercancías, en realidad no ha mejorado de forma significativa la calidad de vida de los habitantes de las zonas vecinas a proyectos de este tipo.

Este paradigma económico privilegia la agroindustria por encima de la producción de alimentos, lo que deja en duda si existe realmente una preocupación por generar seguridad alimentaria al interior del país “En los casos donde el agronegocio produce alimentos (hortalizas, frutos, cereales de consumo humano) el objetivo no es alimentar personas, sino ganar dinero; alimentar personas es algo contingente, no fundamental” (Yacoub, Duarte, & Boelens, 2015, p. 35). La alta concentración de tierras productivas destinadas al cultivo de biocombustibles (Svampa, 2013), así como la expansión de monocultivos (Yacoub, Duarte, & Boelens, 2015) y ganadería extensiva (Maecha, Gallego, & Pelaez, 2002) ha relegado a los campesinos que desean producir alimentos variados y típicos del territorio como una minoría y por tanto aumentando la vulnerabilidad alimentaria generalizada. El papel de los intermediarios para acceder a alimentos evidencia las fallas existentes en infraestructura a lo largo del país y genera dependencia de los productos importados para mantener una dieta que se ha adaptado al panorama alimenticio contemporáneo, lo que define Pérez como alimentarse de la nada.

“el producto al que se ha quitado su maléfico efecto dañino sobre los cuerpos estilizados y esbeltos postmodernos; se trata de café con olor y sabor a café, pero sin ser realmente café. Dicho de forma más clara, se trata de consumir algo sin su

esencia, ingerir productos privados de su realidad, en el fondo, consumir *nada* ”

(Perez, 2008, p. 413).

Este paradigma económico también afecta el acceso y protección de las fuentes acuíferas, ya que se estima que al menos 10% de los sistemas de paramo se encuentran concesionados para algún tipo de explotación minera (Molina, 2011), lo que va en clara contravía con la jurisprudencia establecida en el artículo 34 de la Ley 685 de 2001 y la Ley 1450 de 2011 que determinan las zonas excluidas de las actividades mineras y entre ellas se establece a los páramos, por lo que deben ser considerados espacios de especial protección. Adicionalmente, la producción de agroindustria demanda una cantidad notoria de agua para lograr la producción proyectada, lo que sin duda crea conflictos prácticos con respecto a la prioridad que se da a la cobertura de agua al sector privado o a la comunidad en general desembocando en lo que se ha denominado como el despojo del agua “el 71% de los usuarios tienen acceso al 9% del agua, mientras que el 0,1% (empresas) tienen acceso al 36% del agua disponible” (Göbel & Ulloa, 2014, p. 83).

Con respecto a esto se ha podido evidenciar la forma en que se prioriza la demanda privada en proyectos de gran envergadura como en el caso del proyecto Cerrejon departamento de La Guajira (Moscote & Castellanos, 2014) y Cerro matoso, Córdoba (Moreno, 2016). Por tanto, es posible inferir una paradoja en la posición económica de las últimas décadas del Estado colombiano, pues si bien su obligación primigenia es la de “promover la prosperidad general” (Constitucion Politica de Colombia, 2016), encuentra en la practica un interés superior por asegurar el funcionamiento del sector privado fundamentado en que su crecimiento asegura el bienestar de la comunidad apoyado en la curva de Kuznets (Piketty, 2014) y el papel del crecimiento económico como medio para disminuir la desigualdad. Sin embargo, ante esta teoría el mismo Piketty afirma que “la historia de la distribución de la riqueza es siempre profundamente política y no podría resumirse

en mecanismos puramente económicos” (Piketty, 2014, p. 41). Por ello, se hace fundamental debatir con respecto al papel que tiene el Estado colombiano en la reproducción de la desigualdad en un sistema económico basado en el neoextractivismo y el agronegocio sin considerar el impacto que tienen estas posturas económicas en los constructos sociales expuestos en la primera parte de este texto.

2 ¿Seguridad alimentaria?

Como se analizó con anterioridad, la producción de alimentos en Colombia parece ser un tema casi irrelevante en el discurso político, pues se da mayor relevancia a la producción de materias primas que alimenten el sistema económico más que los cuerpos de los ciudadanos. Es por ello que la economía informal de las ciudades se ha especializado en vender las populares uvas chilenas, las naranjas de valencia y las peras extranjeras. Siendo este el panorama general, valdría la pena definir qué se entiende por seguridad alimentaria y analizar si es posible hablar de seguridad alimentaria en Colombia.

Con respecto a la definición de seguridad alimentaria, la mayoría de teóricos y estudiosos del tema concuerdan en que el concepto de la FAO comprende una parte significativa del concepto:

“existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996).

Ahora bien, en Colombia no existen hitos jurídicos específicos con respecto al tema en la constitución política, puesto que el pronunciamiento más cercano al tema se halla en el artículo 65 de la misma. Sin embargo, no hace referencia directa a la seguridad alimentaria, sino que hace referencia a la producción de alimentos y el aumento de la productividad en el sector agropecuario.

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual

manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad” (Constitucion Politica de Colombia, 2016).

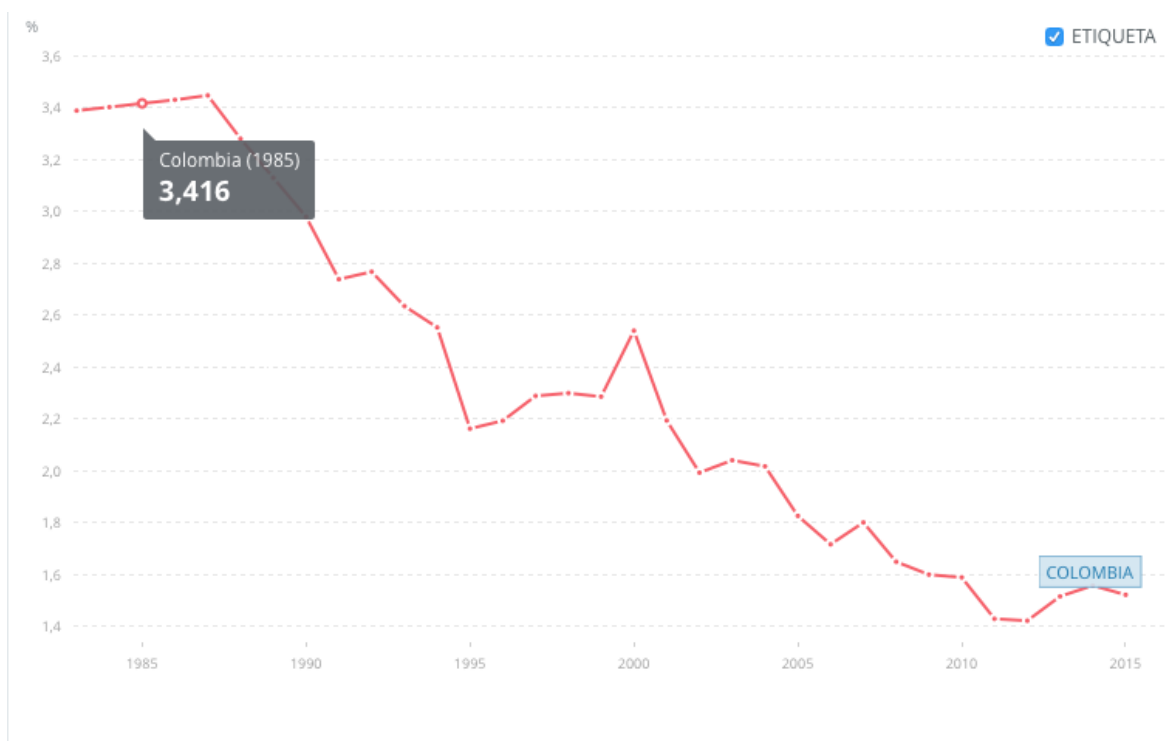
A pesar de esta ausencia, en la jurisprudencia parece darse por entendido que la seguridad alimentaria es un deber estatal que se desprende de este artículo y lo evidencian los fallos de la corte constitucional en los que se entiende a la seguridad alimentaria como una condición fundamental de los ciudadanos, con especial énfasis en las comunidades agrícolas del país. Muestra de ello, se encuentra en una serie importante de fallos dentro de los que se destaca la sentencia C-035 de 2015, T-466de 2016 y C742 de 2012. En todas ellas se menciona la seguridad alimentaria como una garantía que se desprende de la interpretación realizada al artículo 65.

“El artículo 65 de la Constitución dispone que la producción de alimentos pecuarios y pesqueros gozará de la especial protección del Estado. Con ello está previendo la seguridad alimentaria como principio y, por esa vía, exigiendo del Estado la protección e impulso de la producción de alimentos” (Corte Constitucional de Colombia, 2015).

“el Estado, atendiendo a sus obligaciones internacionales, debe abstenerse de adoptar medidas que impidan el acceso a la alimentación, lo cual sucedería con el cambio de vocación de la tierra. Igualmente, manifiestan que con la figura de las AEM existiría una vulneración de la obligación de protección del acceso a la alimentación de las comunidades cuyo único medio de sustento es la agricultura” (Corte Constitucional de Colombia, 2016)

Sin embargo, vale la pena preguntarse si en la práctica se realiza una especial protección a la producción de alimentos y si la productividad de este sector se ha visto aumentada como lo demanda este artículo. Para ello, habría que analizar la porción de tierra productiva que se destina para el cultivo de alimentos y si es posible satisfacer las necesidades alimenticias que demandan las actividades que se ejecutan en un territorio tan particular como California.

Ilustración 4 Porcentaje de tierra destinada a agricultura



(Banco Mundial, 2017)

Según estadísticas del Banco Mundial, a partir de la década de los 80 es evidente una tendencia constante e incluso alarmante de disminución con respecto al porcentaje de tierra cultivable en Colombia, pasando de un 3,4% en 1987 a un 1,4% para 2015. En tanto, para el año 2012 una cantidad aproximada al 1,8% del territorio nacional se encontraba en proceso de explotación minero de forma legal y de manera irregular existían 22,3 millones de hectáreas (Contraloría

general de la nación, 2013), lo que supondría un 14% del territorio destinado a actividades mineras, de los que el 72% son minas de pequeña envergadura (Güiza , 2013). Allí se evidencia de nuevo una contradicción entre el deber ser de las políticas económicas en Colombia y el ser práctico del Estado. Entonces, su enfoque de producción se ha orientado a la explotación minera dejando de lado el esfuerzo que le es inherente para aumentar la producción de alimentos y mejorar el acceso a los mismos.

Ilustración 5 Porcentaje de unidades de explotación minera discriminado por escalas de producción



Figura 1. Porcentaje de unidades de explotación minera discriminado por escalas de producción.

(Güiza , 2013, p. 112)

Como se comentó con anterioridad, la acumulación de terrenos por parte de las empresas mineras se ha convertido en un proceso constante durante los últimos años (Buitrago, 2012), producto de ello las comunidades mineras y agrícolas de municipios como California ven afectada su capacidad de agencia (Bourdieu, 1997) con respecto al uso de la tierra. Es decir, la mayoría de títulos mineros no tienen relación directa con la propiedad de la tierra.

Por ejemplo, la entrega de títulos hace que la explotación de minería artesanal o tradicional en estos terrenos se trate de una actividad ilegal, pues el material que se encuentra allí no pertenece a

los dueños de los terrenos, sino a quien posee los títulos de explotación. En tanto, en aquellas veredas donde la mayoría de sus habitantes dedican su cotidianidad a la agricultura, como producto de una relación casi inexistente con el proyecto Angosturas, no han desarrollado casi de ningún tipo de vínculo con las empresas presentes en el territorio.

Como consecuencia de lo anterior, parece necesario un análisis con respecto a la propiedad de los materiales del subsuelo que teóricamente pertenecen al Estado colombiano de acuerdo con el artículo 332 de la Constitución Política. “El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes” (Constitucion Politica de Colombia, 2016). Sin embargo, es llamativa la manera en que la titulación minera de terrenos privados es entregada a empresas sin contar con la intermediación de algún ente estatal, sino que se hace a través de una transacción entre privados vendiendo propiedades estatales y por tanto su potencial de explotación. Esta ha sido la metodología para acumulación de tierra por parte empresas como Minesa que es ejecutada aun antes de la expedición de su licencia ambiental.

Sin embargo, ante un panorama de poco fortalecimiento del sector agropecuario en el territorio por parte de las entidades estatales, el sector privado, encarnado en entidades como Minesa ha enfocado su atención en el mejoramiento de las herramientas de aquellos grupos sociales que se enfocan en la producción agropecuaria del municipio. Por ello, parece crearse una disyuntiva particular, pues al evidenciarse este esfuerzo por parte del sector privado, la respuesta por parte del sector público ha sido mínimo, puesto que la inversión en infraestructura se ha enfocado en mejorar las vías de acceso a los proyectos mineros, así como el seguimiento a las condiciones laborales de quienes se vinculan con este sector productivo. Ahora bien, al realizar un acercamiento a la infraestructura asociada a la producción alimentaria en California es posible percibir una

asimetría, pues las vías de acceso a las veredas Pantanos y Santa Úrsula se encuentran en condiciones diametralmente opuestas a las vías de acceso en las veredas de corte minero.

Esto genera la búsqueda de una vinculación de forma directa con el sector privado por parte de la comunidad agrícola aun sin ser un deseo expreso, pues Minesa se ha convertido en una entidad que en muchos casos satisface las demandas de la comunidad ante la presencia casi agónica del Estado en este territorio. A través de los doce programas diseñados por la empresa para impulsar la economía local, una parte significativa de la comunidad encuentra una contraparte en el proceso de comunicación y demanda para generar bienestar en el territorio.

Es decir, la producción de alimentos y en general de bienes en el municipio de California está atravesada por una entidad pluridemandante que no solo debe cubrir las necesidades de sus trabajadores, sino que a través de este impulso a la economía local genera afinidad con la comunidad, ello crea una paradoja al interior de las familias californianas, puesto que ante el proceso de Angosturas se entiende el proceso como un potencial para mejorar las condiciones laborales del municipio, pero en sincronía, son conscientes de los impactos ambientales y sociales que producirá la explotación a gran escala de los recursos que hoy en día son explotados de manera informal en la mayoría de los casos (ver anexos).

Ahora, al indagar con respecto a los espacios en donde se da la interacción entre ofertantes y demandantes es llamativa la forma en que se organiza territorialmente el encuentro, ya que los alimentos disponibles para el consumo son llevados a través de camiones al municipio por parte de comerciantes provenientes en su mayoría de Bucaramanga y que obtienen los alimentos en la misma ciudad. En este proceso es llamativa la forma en que la intermediación entre productores y consumidores finales se extiende de una forma curiosa, teniendo en cuenta que varios de los

alimentos más consumidos por parte de las familias (tomate, cebolla y mora) son producidos en municipios vecinos como Charta y Surata.

Ilustración 6 Mapa de la provincia Soto Norte



(Cooperacion Autonoma Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, 2018)

En este sentido, la ciudad de Bucaramanga parece ser no solo un consumidor de los alimentos producidos en la región de Soto Norte, sino que también se convierte en un proveedor de alimentos, al menos para el caso de California. Teniendo en cuenta esta dinámica de oferta, es posible bosquejar un panorama de vulnerabilidad por parte de los consumidores, pues se encuentran a merced de los precios impuestos por los comerciantes, ya que no existen espacios de comparación

y por tanto de competencia. Se trata de un modelo en el que existen días determinados en los que los comerciantes arriban al municipio con una cantidad determinada de alimentos, lo que hace inaccesibles algunos cuando su precio es más alto del que están dispuestos a pagar los comerciantes y por tanto la demanda no se hace de manera libre. Claro está, que aquellos alimentos que se encargan de forma particular tendrán unos costos adyacentes mayores.

Adicionalmente, el papel de estos intermediarios aumenta de forma directa el costo de los alimentos, pues no solo deben cubrir los costos que implica el desplazamiento de su lugar de producción a la ciudad de Bucaramanga, sino que deben cubrir los costos del desplazamiento a California y la ganancia de quien los lleva, estos costos claramente son adicionados a cada uno de los alimentos llevados. Para ilustrar este fenómeno puede ser utilizado un ejemplo: en una suposición, el costo de producir un kilo de mora en Charta es de 2400 pesos, por tanto, el productor lo vende en 3000 al comerciante que utiliza su camión para recolectar productos y venderlos en la plaza mayorista de Bucaramanga, este comerciante a su vez vende este kilo de mora en 4000 pesos en la ciudad. Ahora bien, estos productos son comprados por otros comerciantes al precio de 4000 pesos para ser llevados a municipios cercanos como California; pero para generar ganancia y cubrir el gasto de la gasolina y demás gastos adyacentes el precio aumenta a 5000 pesos, lo que genera un aumento del 125% en su precio original que es asumido por el consumidor y que además no genera una ganancia significativa para el productor y cuya plusvalía se encuentra en los intermediarios (estos precios fueron averiguados durante la segunda salida de campo).

La dinámica descrita hace que los precios de los alimentos cotidianos en California sean mayores a los que se presentan en municipios cercanos, al mismo tiempo hace que quienes deseen satisfacer sus necesidades a través de esta lógica deban ver aumentados sus gastos. Es en esta dinámica, que la explotación aurífera se erige como una de las pocas actividades que permite cubrir las

necesidades básicas, pues la adquisición de alimentos es sostenible a partir de la generación de ingresos amplios, lo que hace inaccesible una variedad de alimentos (uvas, pescado y hortalizas entre otros) para aquellas personas con un ingreso económico limitado, sobre ello comenta Guiza: “sus ingresos (el de los mineros) podrían estar entre 3 y 5 veces por encima del estándar salarial en el caso de la minería aurífera” (Güiza , 2013, p. 113).

Por otra parte, las familias agrícolas acuden a estos mercados para complementar los alimentos que son producidos por ellos, lo que disminuye su nivel de dependencia puesto que, en caso de existir un alza en los precios de los alimentos traídos, su capacidad para satisfacer las necesidades más básicas es mayor, ya que se trata de economías campesinas familiares (Schejtman, 1980, p. 129), cuya premisa fundamental es asegurar la sobrevivencia. Ahora bien, esta dinámica puede ser entendida a través de la noción de *habitus* propuesta por Bourdieu, pues se trata de una interacción constante entre actores involucrados en los que una mercancía específica genera una interpretación económica, simbólica y política particular, ya que es un bien que genera relaciones de poder particulares “son principios generadores de prácticas distintas y distintiva... pero también son esquemas clasificatorios, principios de clasificación, principios de visión y de división, aficiones, diferentes” (Bourdieu, 1997, p. 20) . Allí, en esa conversación entre comerciantes, consumidores y productores es donde habría que preguntarse si existe seguridad alimentaria en California.

No es posible asegurar que exista un acceso efectivo y constante a los alimentos, pues este acceso en la mayoría de los casos se encuentra atravesada por la intermediación de actores externos al territorio. Adicionalmente, la producción del territorio no solo es insuficiente para cubrir la demanda, sino que no existe una estrategia articulada para incentivar la producción de alimentos en el territorio, estas condiciones sumadas a la inminente llegada de Minesa al territorio y la posible vinculación de la mayor parte de la mano de obra disponible en el municipio puede generar una

desvinculación de la reducida población agropecuaria con la tierra y por tanto aumentar la vulnerabilidad general de la comunidad californiana.

Este panorama sumado a la competencia generada alrededor de la posesión de la tierra y los cambios que se prevén en el acceso al agua y su calidad se convierten a California en un territorio de alta vulnerabilidad en el terreno de la seguridad alimentaria, puesto que depende del funcionamiento armónico de muchos actores y una ruptura en la cadena de acciones establecidas puede generar un contexto complejo que permita dar cumplimiento a las necesidades básicas de las familias presentes en el territorio, ya sean de corte agricultor, minero o cualquier otro.

2.1 Practicas alimenticias

La alimentación más allá de satisfacer una necesidad biológica se trata de un campo en el que florecen sistemas de interpretación, relaciones de poder y que se encuentra atravesado por las lógicas del sistema económico en el que se desarrolla la cotidianidad de las comunidades. Como se ha dicho con anterioridad, parece existir un paralelo divisor en la comunidad californiana que clasifica entre el ser minero y el ser agricultor. Esta división se materializa en muchas formas, pero una de ellas y la que es central en esta investigación es la construcción de las practicas alimenticias, que a pesar de producirse en un territorio común tiene particularidades llamativas, pero también convergencias significativas. Por ello, es necesario partir de una distinción de espacios, actividad laboral y grupos familiares, pues estas variantes configuran practicas alimenticias distintas y que se adaptan al panorama económico y político descrito en el primer capítulo.

Al distinguir los espacios, es fundamental comentar la diferencia que existe entre quienes habitan en el sector urbano del municipio y quienes se encuentran en el sector rural. En primer lugar, se debe comentar que la utilización de cocinas con conexión de gas es común en el sector urbano (99%), mientras que en el sector rural se trata de un servicio poco accesible y no existen datos al

respecto (Alcaldía municipal de California, 2016, p. 37), con todo lo que esto trae consigo. En primera instancia, se trata de un factor potencial para la generación de enfermedades respiratorias (Perez Padilla, Regalado Pineda, & Moran Mendoza, 1999), así como la disposición de mayor cantidad de tiempo para la cocción de los alimentos. En segunda instancia, el espacio para la compra de alimentos es diametralmente distinta, pues quienes se encuentran en el sector rural, especialmente en las zonas más alejadas (veredas Santa Úrsula y Angosturas) dependen de manera más notoria del desplazamiento de comerciantes que lleven los alimentos hasta sus veredas, que generalmente se realiza los jueves de todas las semanas.

En tanto, quienes se encuentran en las cercanías del centro urbano cuentan con posibilidades de ir a los pocos puestos de alimentos que suelen ubicarse en una esquina de la plaza central del municipio entre los jueves y viernes. Ahora bien, ¿existen diferencias en los alimentos que se ofrecen en estos espacios? En primera instancia, existe una diferencia espacial en la medida en que los comerciantes que cubren la zona rural suelen estacionarse en la vía principal y venden sus productos desde el interior de sus camiones, lo que limita el proceso de selección de alimentos, ya que los alimentos no son accesibles en su totalidad para los consumidores, haciendo que los alimentos en mejor estado sean comprados por quienes se encuentran en las veredas que son cubiertas primero (Centro, Cerrillos y La Baja).

Ilustración

En el sector urbano los alimentos se hacen más accesibles para los compradores puesto que las “casetas” se ubican en un lugar fijo localizado en la esquina inferior del parque municipal frente a las pocas tiendas existentes en el municipio; en estas casetas se ubican los alimentos sobre mesas de plástico o madera traídas por los comerciantes (de nuevo, en su mayoría provenientes de otros municipios o de Bucaramanga) y techos en lamina de lata. Sin embargo, la oferta de alimentos

suele estar limitada a aquellas materias que tengan un precio accesible para quienes los movilizan, por ello no se trata de una oferta constante, sino que es determinada por las condiciones del oferente.

Con respecto a la actividad laboral, existen cinco grupos fundamentales en la comunidad californiana que desarrollan vínculos con las practicas alimenticias de acuerdo a su posición dentro del territorio. En primer lugar, quienes se dedican a las actividades mineras parecen tener una relación distante con los oferentes de alimentos, puesto que su actividad económica requiere internarse en socavones durante una cantidad de tiempo importante, por lo que la llegada de comerciantes sucede durante espacios de tiempo en los que quienes realizan estas actividades (mayoritariamente hombres) se encuentran minando o descansando luego de las largas jornadas de explotación. Este grupo de consumidores divide sus alimentos en dos espacios, puesto que durante el tiempo empleado en las búsquedas de minerales que suele tomar entre uno y cuatro días seguidos al interior de los socavones, la comida que es llevada allí está compuesta mayoritariamente por alimentos enlatados como salchichas, atún y sardinas, así como granos (arroz, lentejas y frijol) que son cocinados al interior de los socavones puesto que allí son utilizadas estufas de gas o eléctricas que permiten la cocción de alimentos. En referencia con las bebidas que se consumen durante estas labores, se trata en su mayoría de bebidas azucaradas como gaseosas y frescos o aguapanela que se produce al mezclar agua con panela.

Ahora bien, en los momentos que transcurren más allá de los socavones, los alimentos que consumen tienen diferencias significativas puesto que se trata de una disminución notoria en el consumo de granos, que son remplazados por el consumo de tuberculos como papa, yuca y guatila. Adicionalmente, su dieta ve aumentada la presencia de proteína animal; especialmente carne de res y pollo, el cerdo no suele estar dentro de la dieta californiana más allá de productos procesados

como salchichas, jamón o tocino. Con respecto a las bebidas, estos alimentos suelen estar acompañados por jugos naturales endulzados con azúcar refinada; las frutas más utilizadas para la preparación de estos jugos son lulo, mora y mango, pues son las frutas más comunes dentro de la oferta alimentaria que llega al municipio.

Con respecto a la dieta de las familias agricultoras del municipio, como se ha hecho notar a lo largo del texto, existe una serie de prácticas diferentes con respecto de quienes laboran en el sector minero. En primer lugar, su trabajo se fundamenta en una relación cercana con los alimentos y su producción. Es decir, la relación con el sector comercial es menor, pues generalmente la producción familiar se enfoca en el cultivo de alimentos básicos para la alimentación cotidiana como tomate, lechuga y arvejas (Alcaldía municipal de California, 2016, p. 45). Es importante comentar que en ningún caso se pudo evidenciar dedicación exclusiva de terrenos o monocultivos en las veredas agrícolas, sino que se trataba de terrenos amplios entre 10 y 15 hectáreas en las que existen divisiones marcadas para la producción de distintos alimentos, así como la destinación de espacio para el cuidado de ganado en poca extensión, es decir cada familia cuenta con alrededor de 6 o 7 vacas y destina espacio para la ubicación de galpones para el cuidado de pollos y gallinas. Ante este panorama, las comidas de estas familias suelen tener estos elementos como bases estructurales, por lo que el consumo de pollo, huevos y productos lácteos son la generalidad.

Tabla 2 Producción agrícola y pecuaria del municipio

Producto agrícola	Área sembrada	No. de Productores	Población	Unidades
Cebolla Cabezona	7.860 m ²	24	Ganado Bovino	875
Curuba	2.501 m ²	1	Cerdos de Ceba	26
Frutales (varios)	260 m ²	2	Equinos	2
Hortalizas	520 m ²	5	Gallinas ponedoras	92
Maíz	2,8 has	26	Pollos de engorde	75
Mora Castilla	5.650 mts	4	Cabras	148
Papa (pastusa y criolla)	5.040 m ²	7		

(Alcaldía municipal de California, 2016, p. 35)

Ante este panorama, la relación con los comerciantes que arriban al municipio se realiza de manera esporádica para adquirir alimentos que no pueden ser cultivados en la zona o cuya disponibilidad no es común, como arroz, pescado y frutas como mango o lulo. Estos productos suelen ser utilizados en ocasiones especiales o son adquiridos cuando se realizan viajes a la cabecera urbana con el fin de llevar los productos que son encargados por algunos de los habitantes de la zona urbana como cuajada, queso o huevos; estos productos son vendidos en cantidades pequeñas (encargos de uno o dos kilos, que se venden entre 3000 o 4000 pesos por kilo o cubetas de 30 huevos en alrededor de 6000 o 7000 pesos).

Es importante resaltar el papel que tienen los niños y jóvenes en la producción alimentaria, pues se trata de una actividad familiar, lo que no es un fenómeno aislado o único de este territorio, pero si puede ser entendido como una diferencia social llamativa, puesto que en el sector minero no solo es prohibida la articulación de los niños y jóvenes en estas tareas, sino que se trata de un hecho altamente reglamentado. Por ello, la transmisión de conocimientos asociados a esta actividad puede ponerse en duda, mientras que en las familias agricultoras la articulación de los niños y jóvenes se entiende como algo deseable y primordial para asegurar la sostenibilidad de los modelos productivos.

El tercer sector laboral del municipio está conformado por aquellos contratistas o miembros de las empresas mineras de gran escala (Minesa y Ecooro entre otras); este grupo se caracteriza por ser exclusivamente consumidor y no suele generar vínculos económicos con los comerciantes de alimentos ni con los productores, pues su relación con los alimentos se da a través de espacios que han creado convenios con las empresas presentes, por ello la alimentación es provista por la empresa contratante y es ofrecida en restaurantes con altos estándares de calidad en términos de

higiene. Este grupo se abstrae de las dinámicas económicas analizadas con anterioridad, pues el costo de cada comida es fijo y la forma de enfrentar los movimientos económicos o la disponibilidad de alimentos es asimilada por los dueños de los restaurantes.

Para este grupo, la dieta se compone de una mezcla de los dos grupos mencionados anteriormente, los tubérculos son comunes, así como los granos, la proteína animal suele ser central en la oferta, así como las frutas que son utilizadas como postres. En este caso se trata de manzanas, peras, duraznos y bananos en su mayoría. Cabe destacar que se trata de platos diseñados de forma tal que permitan cubrir la demanda calórica que supone las actividades de exploración e investigación que se desarrolla en la actualidad, por ello las porciones suelen ser amplias y con la mezcla de varios alimentos del mismo tipo.

El cuarto grupo de consumidores alimenticios es conformado por aquellos usuarios de instituciones públicas que reciben alimentos por parte de estas. Es decir, se trata de los niños y jóvenes que asisten a la escuela municipal, así como los adultos mayores que asisten al hogar “Años Dorados” (ver anexos), en estas instituciones reciben alimentos durante el desayuno y el almuerzo en el caso de la escuela municipal, por parte de Años Dorados, existe la oferta de desayuno, almuerzo y cena o “comida”. En el caso de la escuela el diseño de cada porción tiene como finalidad cubrir la demanda energética derivada del proceso académico y es diseñado por el PAE (Alcaldía municipal de California, 2016), en este caso la oferta suele incluir productos como pasta, arroz, papas y yuca, suelen ir acompañados por proteína animal de res o pollo, en algunas ocasiones son cambiados por carnes frías tales como jamón o salchichas. Estos platos suelen ir acompañados de jugos empacados en cajas que son llevados desde Bucaramanga con sabores como manzana, pera y naranja, como postre suelen ser entregadas galletas o frutas que incluyen bananos, manzanas y uvas.

En el caso de los adultos mayores que asisten a Años Dorados, su dieta es compuesta esencialmente por granos como el arroz, frijol y lenteja; que se complementan con huevos y alguna proteína animal en pequeñas cantidades, los jugos que acompañan estos alimentos suelen ser hechos de frutas como guayaba, mora y fresa, en la mayoría de los casos sin endulzantes complementarios. Estas porciones generalmente son diseñadas por la enfermera que dirige esta institución que según la comunidad es provista por Minesa.

Este grupo no suele tener una relación profunda con la dinámica de oferta y demanda de alimentos, pues la institución a la que asisten es la encargada de generar la oferta alimentaria. Sin embargo, en sus interacciones familiares si se relacionan directamente con esta dinámica, pues de acuerdo a su jerarquía al interior del sistema pueden ocupar una posición activa o pasiva en la adquisición de alimentos, ya que los niños y jóvenes pueden ser activos al acompañar a sus padres a comprar alimentos y a través de sugerencias cambiar la dieta familiar, así como algunos adultos mayores producen alimentos en sus territorios para abastecer sus preferencias y generar algunas ganancias con la venta de productos lácteos o alimentos producidos bajo encargo como yuca, plátano y algunas frutas.

El último grupo de consumidores está conformado por algunas familias que se desplazan constantemente entre California y municipios cercanos (Vetas, Charta, Surata y Bucaramanga) por motivos laborales o personales, este grupo suele adquirir sus alimentos en otros municipios; especialmente en Bucaramanga, por lo que eliminan uno de los eslabones en la cadena de distribución alimenticia descrita anteriormente. Este grupo de personas suele desempeñarse en actividades laborales derivadas de la prestación de servicios, venta de productos alimenticios, cuidado personal e implementos médicos. Este sector del territorio compone su dieta de productos como arroz, pasta, tubérculos y adiciona con frecuencia vegetales como arvejas, calabacín, lechuga

y repollo, estos se complementan con proteína animal de pollo, res, cerdo y pescado que es más frecuente en este grupo.

Las bebidas consumidas por este grupo es su mayoría se componen de jugos naturales y bebidas azucaradas (gaseosas, jugos en caja, etc.) y sus postres se componen de productos empaquetados azucarados. En este grupo existe una particularidad, puesto que para reproducir esta dinámica adquisitiva es necesaria la utilización de medios tales como automóvil o camiones que permitan la movilización de estos alimentos, pero debido a la eliminación de la intermediación por parte de los comerciantes que llevan los alimentos, los costos de esta alimentación es menor y se establece un medio para encargar alimentos que son de difícil acceso en el territorio como uvas, pescado y cereales. Se trata sin duda del grupo con mayor capacidad de agencia para elegir los alimentos que serán consumidos, pues cuentan con los medios para asegurar el acceso a una mayor oferta de los mismos.

Al hacer referencia a los grupos familiares es de acotar que se hace referencia al papel que desempeñan los distintos miembros de las familias y su rol en la dinámica alimentaria de las familias. En consecuencia, un primer acercamiento puede hacerse por sexo, puesto que las mujeres y los hombres tienen asignada una posición marcada que construye la concepción de género presente en el territorio.

Tabla 3 alimentos consumidos discriminados por actividad laboral (elaboración propia)

Grupo de consumidores	Espacio de consumo	Proteínas	Granos	Vegetales	Frutas	Bebidas
Mineros	Socavon	Atún, Sardinas, salchichas enlatadas	Arroz, garbanzo y lenteja	N/A	N/A	Bebidas azucaradas, aguapanela y café

	Hogar	Carne de res y pollo	Arroz, maíz y frijol	Lechuga, tomate y cebolla	Pera, manzana y banano	Jugos naturales, bebidas azucaradas y café
Agricultores	Producidos	Carne de res, pollo y huevos	Maíz y frijol	Papa, lechuga y tomate	Mora, curuba, fresa y mango	Aguapanela y jugos naturales
	Comprados	Pescado y carne de cerdo	Lentejas, arroz y frijol	N/A	Lulo, tomate de árbol y maracuyá	Bebidas azucaradas, café y chocolate
Contratistas	Restaurantes con convenio	Carne de res, pollo, huevo y cerdo	Arroz, lenteja, frijol, garbanzo, papa y yuca	Lechuga, tomate, cebolla, calabacín y ahuyama	Papaya, fresa, manzana, pera y mango	Jugos naturales, limonada, café y chocolate
Comerciantes	Traídos	Pescado y carnes frías	Harina, pasta y tortillas	Espinaca, zanahoria y hongos	Melón, piña y duraznos	Bebidas azucaradas
	Consumidos	Pescado y carnes frías	Harina, pasta y tortillas	Espinaca, zanahoria y hongos	Melón, piña y duraznos	Bebidas azucaradas, café, chocolate y jugos naturales
Instituciones	Consumidos	Carne de res y pollo	Arroz, pasta y lenteja	Tomate, lechuga y tomate	Pera, manzana y banano	Jugos naturales, limonada, café y chocolate

A partir de las primeras líneas de este documento se puede percibir un aura de un pensamiento casi hegemónico presente en el territorio construido a partir de la influencia de la iglesia católica y de la cosmovisión que esta implica, esta manera particular de concebir el mundo asigna toda una serie de normas socialmente construidas a partir de lo que se ha denominado como la performatividad

de género “El género está condicionado por normas obligatorias que lo hacen definirse en un sentido u otro (generalmente dentro de un marco binario) y por tanto la reproducción del género es siempre una negociación de poder” (Butler, 2009, p. 322), en estas normas existe una marcada distinción de la manera en que interactúa cada sujeto con los alimentos, pero también en los demás ámbitos de la vida. En el tema que es central de esta investigación (las prácticas alimenticias) es posible identificar un papel de las mujeres asociado al espacio privado (Bourdieu, 1999), al hogar, a la explotación minera en los “molinos” y a lo que se define como economía del cuidado (Esquivel V. , 2011), en el terreno de la alimentación, su labor suele estar asociada a la preparación de alimentos, pero también a ser las encargadas de la adquisición de alimentos, es decir, las mujeres tienen en su mayoría la responsabilidad de administrar el dinero de la alimentación, su preparación y la organización de la misma.

De forma complementaria, en la mayoría de los casos los hombres suelen restringir su relación con los alimentos a una posición de consumidores, puesto que su posición de poder vinculada con el espacio público demanda una mayor cantidad de tiempo por fuera de la vivienda, haciendo que su relación con los circuitos de producción y distribución sea alejada. Sin embargo, en las familias agricultoras, el papel de los hombres en la producción de alimentos es mayor, puesto que suelen desempeñar labores de alta demanda energética, en estos grupos familiares las mujeres se vinculan también con la preparación de los alimentos y con el cuidado del ganado y las plantas que se encuentran más cercanas a la vivienda, parece entonces que en estos contextos sigue asociándose a la mujer con labores cercanas al hogar y mientras mayor es la distancia de los cultivos con respecto a la vivienda su referente debe ser el hombre.

Como se expuso con anterioridad, el papel de los niños y jóvenes es diferente en estas labores con respecto a la edad de vinculación a las labores que desempeñan sus familias, puesto que quienes

proviene de familias agrícolas suelen tener un papel mucho más activo en la producción alimenticia (Becerra, Vasquez, Zapata, & Garza, 2008), ya que desde temprana edad se les incorpora a labores asistenciales en el cuidado de ganado, el proceso de cultivo y los momentos de recolección; mientras que en las familias mineras la vinculación a labores de extracción o procesamiento se realiza alrededor de los 15 o 16 años, que coincide con una disminución de estudiantes registrados en la escuela municipal (Alcaldía municipal de California, 2016). Pero antes de esta etapa, los niños y jóvenes se vinculan a labores educativas y suelen pasar su tiempo libre recorriendo el municipio o realizando labores de cuidado.

2.2 ¿Es posible la coexistencia del modelo extractivista o neoextractivista y la seguridad alimentaria?

Al revisar las páginas escritas con anterioridad preguntarse ¿la seguridad alimentaria y el neoextractivismo son condiciones excluyentes en la economía colombiana? Esta pregunta no se puede abordar como una inquietud de respuesta lineal o única, sino que se trata de una discusión en la que las aristas de la problemática son tan numerosas como complejas. Sin embargo, una entrada posible para la reflexión de esta inquietud puede ser una nueva lectura de la obra de Stavenhagen (1981) puesto que, si se concibe a las comunidades latinoamericanas como sistemas que trascienden el dualismo en el que algunos sectores políticos las han querido encasillar, también es fundamental trascender la visión de los sistemas económicos como fenómenos excluyentes. Es decir, el hecho de impulsar la explotación de recursos naturales no debe significar el estancamiento de los demás sectores productivos, incluyendo el sector agropecuario como productor de alimentos.

Sin embargo, existen coyunturas en que estos sectores productivos encuentran tensiones por la utilización de recursos que son condiciones *sine qua non* para el desarrollo de sus actividades tales

como el agua, la tierra y la mano de obra como se ha esbozado en el caso de California. En estas tensiones es donde se puede materializar el interés o si se quiere la predilección de un sector sobre el otro por parte de los gobiernos. En el caso de Colombia, el panorama de tierras destinadas para una y otra actividad evidencia el interés por el fortalecimiento del sector extractivo. Esto, más allá de discusiones éticas tiene implicaciones en la producción y acceso a alimentos por parte de los ciudadanos, puesto que ante un sistema de dependencia global de la explotación de materias primas la seguridad alimentaria pasa a un segundo plano.

En relación con lo anterior, Sierra-Camargo (2011) analiza el modo en que la jurisprudencia nacional ha sido construida para alinearse con los intereses del sector extractivista y dar un velo legal a las actividades realizadas por este sector. “El aparato jurídico que se ha construido como un amalgamiento entre las compañías mineras, las autoridades gubernamentales y la idea de desarrollo impulsada por aquellas y defendida por el Gobierno nacional” (Camargo Sierra & Hurtado Tarazona, 2011, p. 165). Esto no solo es aplicable al sector extractivo, sino también con la denominada agroindustria, puesto que la re-primarización de la economía se ha expandido por los territorios del cono sur, dejando en duda si realmente se trata de la “despensa del mundo”, pues se ha materializado una disyuntiva, en la que la exportación tiene prioridad sobre el aseguramiento del acceso de alimentos al interior del territorio, esto se ve reflejado en el aumento de monocultivos y la producción enfocada a las materias primas necesarias para la producción de biocombustibles.

Tabla 4 Valor de exportación en bienes primarios de países en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe. Exportación de productos primarios como porcentaje del valor total de las exportaciones

Country	2002	2011
Argentina	69.5	68.5
Bolivia	84.2	95.5
Brasil	47.4	66.2
Chile	83.2	89.2
Colom bia	62.2	82.5
Ecuador	89.7	92.0
Mexico	15.7	29.3
Peru	83.0	89.3
Uruguay	63.7	74.3 <small>(2010)</small>
Venezuela	86.2	95.5
MERCOSUR	54.3	67.1
Total Latin America and the Caribbean	40.7	60.7

(Lander, 2014, p. 4).

Ahora bien, si ha de entenderse esta tendencia como un fenómeno sistémico en Latinoamérica, valdría la pena conocer la experiencia que han tenido otras naciones con respecto a la seguridad alimentaria y el extractivismo como bases del aparato económico. Un caso que suele ser citado con respecto a la forma en que los fondos provenientes de la renta extractivista, especialmente proveniente del sector petrolero, es Ecuador. Sobre este caso Pablo Dávalos (2013) realiza un análisis exhaustivo con respecto a la destinación que tienen los fondos provenientes de la explotación petrolera en un país que se ha erigido como un país extractivista con una distribución de la riqueza particular en este sector del continente. Sin embargo, califica esta inversión como una falacia argumentada en tres puntos fundamentales; la inversión en infraestructura derivada de la renta extractiva se destinó especialmente a conectar las zonas donde se realiza la explotación

minera, pero las vías relacionadas con la producción agrícola tuvieron una inversión casi marginal, la mayor parte de los fondos se han destinado al sostenimiento del subsidio a los combustibles, por lo que se ha creado una suerte de burbuja de consumo, en la que la clase media ha dedicado más dinero al consumo, pero realmente no ha impactado de forma notoria a los grupos más pobres y finalmente, la inversión en educación y salud no ha sido tan amplia como se creía, pues la mayor parte de los fondos destinados a estos sectores tiene como finalidad el sostenimiento de la planta física, por ello la inversión en construcción, innovación y nueva infraestructura ha sido menor al 3% anual del presupuesto destinado a estos rubros.

“la renta extractiva creó un comportamiento estratégico con las clases medias a las que convirtió en cómplices y fracturó las solidaridades entre las ciudades y los territorios sometidos a la violencia extractiva. La renta extractiva creó una burbuja de consumo que destruyó la producción nacional porque se sustentó en la importación de bienes de consumo” (Dávalos P. , 2013, p. 30).

De nuevo, al menos en el caso ecuatoriano parece dilucidarse una visión excluyente entre la producción de alimentos y el neo extractivismo, puesto que se evidencia un fenómeno parecido al que sucede en Colombia al priorizar la inversión en lugares donde existen proyectos mineros de gran envergadura y suele dejarse de lado el sector agropecuario, a menos que se trate de agroindustria que no ayuda en el aseguramiento de la seguridad alimentaria, siendo este un panorama que contrasta con la visión de Lander (2014) del plan de Buen Vivir implementado en Ecuador.

Ahora bien, el caso de Bolivia es un caso particular que vale la pena conocer puesto que se trata de un estado intercultural, lo que supone repensar la estructura estatal y, por tanto, el poder de decisión sobre los recursos naturales (punto fundamental dentro de esta reflexión). En este sentido,

se trata no de un debilitamiento a la estructura del Estado, sino más bien de una relegitimación del mismo (Regalsky & Quisbert, 2008), por ello la relación con los recursos naturales, la tierra y el sector privado es, al menos en teoría, distinta. Muestra de ello es la política denominada “Reconducción del Proceso Agrario”, puesto que es estructurada a partir de la delimitación del latifundio para generar una distribución equitativa de la tierra y de este modo disminuir índices de inequidad y pobreza extrema entre otros (Dávalos A. , 2013). Esta iniciativa no solo se enfoca en trabajar por la seguridad alimentaria, sino que introduce en la discusión una categoría fundamental, a la que en el discurso estatal colombiano no ha llegado, la soberanía alimentaria.

“Se acude al nuevo plan sectorial y se reitera como objetivo “Avanzar hacia la seguridad y soberanía alimentaria del país”, buscando asegurar la oferta de alimentos inocuos para la población, enfatizando el desarrollo de las capacidades en la agricultura, ganadería y forestaría comunitaria para la producción de alimentos, con la intención de que, al mismo tiempo que se posibiliten condiciones más equitativas de desarrollo en el campo, se contribuya a la erradicación de la pobreza, y se asegure la conservación de los recursos naturales renovables” (Dávalos A. , 2013, p. 9).

Sin embargo, en el caso de Bolivia, la actividad minera se ha erigido como la principal actividad de exportación materializada en la venta de gas y estaño (Fornillo, 2009). Por ello, las tensiones entre el sector privado, el Estado y las comunidades habitantes de las zonas mineras han sido constantes, puesto que se trata de una fuente de ingresos y empleos de vieja data; por ello los cambios en jurisprudencia asociada a este sector son altamente controversiales y complejos. La diferencia sustancial que existe en el caso de Bolivia es la fuerza con que el Estado ha nacionalizado algunos de los yacimientos más grandes de materias primas, bajo el estandarte de

asegurar el Buen Vivir de las comunidades mineras. A pesar de ello, en lo que se puede considerar una política del sector extractivista, este no es dejado de lado al comprender su potencial como potenciador estatal, creando un nuevo enfoque encaminado a asegurar la seguridad alimentaria de su población e incluso busca implementar el discurso de la soberanía alimentaria en su nación.

“Es desde el poder ejecutivo que una oleada “neo desarrollista” apunta a otorgarle un papel central al Estado en la economía, elemento que se plasmó en la nacionalización del cerro Posokoni, pero que no apunta a limitar o eliminar la instalación del capital privado” (Fornillo, 2009, p. 11).

Finalmente, el caso de Chile es emblemático con respecto a la explotación minera del cobre y la utilización de este sector como impulsor de la economía nacional (Pereira, Ulloa, O’Ryan, & de Miguel, 2009). Este caso es llamativo puesto que ha utilizado la metodología expuesta por Stevens (2003) para generar la diversificación de las entradas económicas y el impulso de la industria nacional y el fortalecimiento de la institucionalidad para generar una distribución equitativa de los fondos provenientes de la explotación minera.

Esta dinámica se materializa en la creación del Fondo de Compensación del Cobre, puesto que utiliza un mecanismo prospectivo para estimar el precio del material y de este modo no generar inflación debido a la inyección desmedida de capital en la economía nacional, pues no solo permite la operación de la gran minería, sino que permite asignar fondos para la regularización de la pequeña y mediana minería, en un modelo dinámico de largo plazo (Pereira, Ulloa, O’Ryan, & de Miguel, 2009).

Este modelo ha permitido la acumulación de capital que se invierte en el impulso de los sectores económicos secundarios y el movimiento de las industrias, en un modelo parecido al creado en

Noruega para subsidiar los sectores que en las economías expuestas con anterioridad suelen ser relegadas a un segundo plano.

Por ello, es posible pensar en metodologías para lograr una economía que tenga la participación de la industria extractivista y el trabajo por lograr la seguridad alimentaria de la población. Es posible trascender la llamada “trampa de la pobreza”, pero esto solo puede suceder a través de un trabajo articulado entre las instituciones públicas, privadas y la comunidad. Pero ello no es posible en tanto se reproduzca una problemática frecuente en la cotidianidad de las zonas mineras, entendida como la “desterritorialización del Estado” (Schuldt & Acosta, 2009) puesto que se trata de la eliminación de las responsabilidades inherentes del Estado con la comunidad y permitiendo que, en la práctica, sus funciones sean asumidas por el sector privado, eliminando el principio fundamental del Estado.

“hay que hacer un esfuerzo enorme y sostenido para maximizar los efectos positivos que se puedan obtener de la extracción petrolera, sin perder de vista que el petróleo se acaba y que el desarrollo no se hace simplemente en base a la extracción de los recursos naturales. Es preciso generar riqueza, no podemos vivir de la renta de los recursos naturales sino del esfuerzo de los seres humanos. Esa es la gran tarea. Si esto no se logra, hay que tener presente que se mantendrán, tanto la maldición de la abundancia, como la paradoja de la riqueza natural” (Schuldt & Acosta, 2009, p. 37).

2.3 Relación entre Estado, sector privado y comunidad en California

Abordar la noción de “desterritorialización estatal” parece fundamental para entender la dinámica cotidiana de la comunidad californiana, puesto que es posible notar una relación desbalanceada entre las demandas realizadas al sector privado y las instituciones estatales. Este fenómeno es

analizado por Schuldt y Acosta en las comunidades indígenas de Ecuador habitantes de la Amazonia; en este contexto las empresas petroleras presentes en el territorio han asumido responsabilidades con las comunidades que irrumpen con las responsabilidades que tiene el Estado y lo sustituye de manera llamativa.

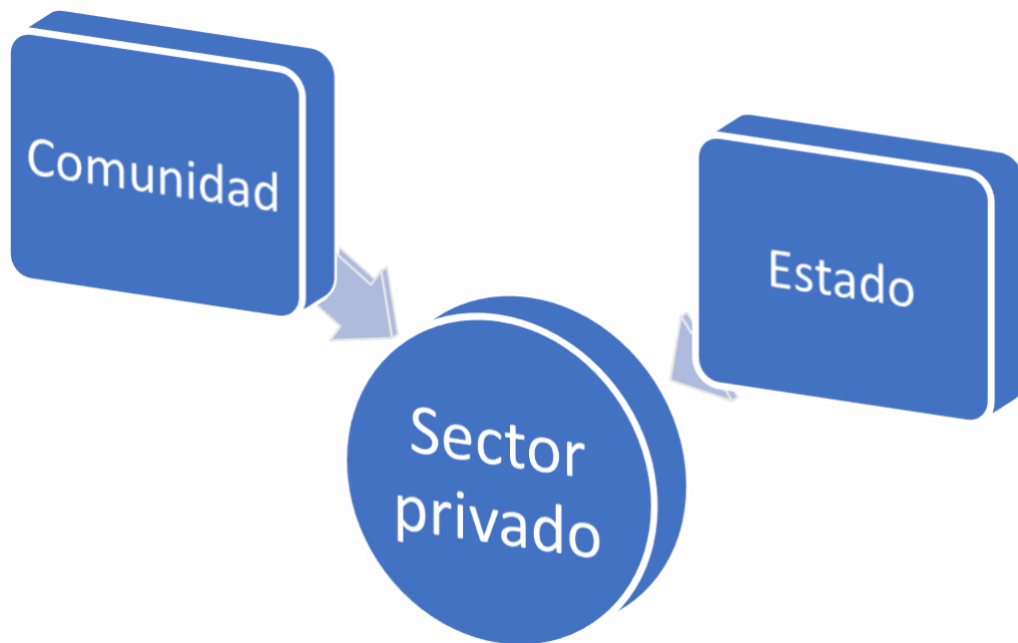
“el Estado pierde participación en la renta petrolera, se diluye más y más su débil presencia en la región, cediendo terreno a las empresas petroleras privadas, que copan el tradicional espacio estatal, relacionándose directamente con las poblaciones amazónicas, asumiendo el papel de suministradores de todo tipo de servicios y de constructoras de obras públicas” (Schuldt & Acosta, 2009, p. 19).

Este fenómeno se ha convertido en una dinámica frecuente en las comunidades que habitan en zonas mineras, de modo que incluso Unicef (2017) alerta a las empresas de este sector económico sobre la inconveniencia de asumir responsabilidades que corresponden a las instituciones públicas y el efecto negativo que puede tener este comportamiento a largo plazo sobre las comunidades. Este comportamiento es visible en California, siendo un espacio en el que (como se ha evidenciado en los capítulos anteriores) no existe una oferta estatal amplia y cada vez se ve más limitada.

En este territorio el sector privado, especialmente Minesa, ha adquirido responsabilidades con respecto a tareas que en el marco legal corresponden a la institucionalidad y que, ante una incipiente actividad por parte del sector público, la demanda de inversión social y apoyo a programas básicos son llevados ante el sector de responsabilidad social; allí encuentran interlocución y en muchas ocasiones fondos para estas demandas. Ello se materializa en responsabilidades que ha tomado el sector privado y que son claramente responsabilidad del sector público, ejemplo de ello es que el transporte escolar que permite el acceso a la escuela por parte de los niños, niñas y jóvenes que habitan en la zona rural es provisto por Minesa, así como el pago

a los médicos destinados al puesto de salud municipal, los empleados del hogar para adultos mayores y el transporte de quienes asisten al mismo han sido asumidos por Minesa, en una clara suplantación del Estado en temas que corresponden a su accionar.

Ilustración 7 relación entre Estado, comunidad y sector privado. (elaboración propia)



Sin embargo, esta relación no solo demuestra una relación desbalanceada entre la comunidad californiana y el sector privado, sino que se trata de también de una relación amparadora por parte de las instituciones públicas, puesto que sus acciones limitadas son resueltas por el accionar del sector privado. En esta relación, si se quiere analizar en términos de poder de acción y decisión, sin duda la balanza se inclina hacia el costado del sector privado. Esta dinámica se ve reflejada en los resultados obtenidos de la cartografía realizada en el territorio con representantes de las diferentes instituciones (ver anexos); durante este ejercicio fue una constante la mención del sector privado como un recurso del territorio, mientras las instituciones estatales fueron asociadas con problemas puesto que su articulación es vista como una debilidad dentro de la comunidad.

Estos vacíos en la articulación muestran al sector privado como un sector organizado ante el que las demandas organizadas encuentran en muchas ocasiones respuesta. Ante esta dinámica ha surgido un comité ciudadano cuya finalidad es actuar sobre la articulación de las diferentes instituciones del municipio para dar respuesta a una serie de problemáticas que han identificado quienes hacen parte del mismo. Este comité denominado como el Gran Pacto Social o GPS tiene como objetivo ser un espacio de discusión y encuentro en el que miembros de la comunidad expresen demandas y problemáticas que se presentan en el territorio para buscar la articulación de distintas instituciones con el fin generar estrategias de abordaje.

Sin embargo, no es posible conocer quienes participan de este GPS, cuáles son sus miembros permanentes o si este comité es auspiciado por alguna institución pública o privada, puesto que no existen actas de estas reuniones. Adicionalmente, durante los acercamientos a campo se encontraron comentarios diferentes, desde quienes aseguran que se trata de un grupo reducido de miembros de la comunidad que buscan beneficiarse al afirmar que representan a toda la comunidad, así como quienes aseguran que solo son escuchados algunos miembros, por lo que se da prioridad a las inquietudes expresadas por quienes tienen algún tipo de influencia sobre el grupo. El GPS es considerado como un recurso significativo e incluso es considerado como una institución dentro de la comunidad, pero parece tener una relación más cercana con el sector privado ya que ninguno de los representantes de las instituciones públicas afirmó participar en las sesiones de este, a excepción del inspector de policía que aseguro haber asistido como asesor de legalidad (ver anexos).

Ahora bien, el GPS parece haberse convertido en una nueva instancia entre la comunidad y el sector privado, pues desde allí se proyecta un medio de comunicación fluido entre estos dos sectores. Entre la comunidad y las instituciones públicas existe una tensión que es expresada con

frecuencia, en especial en tres temas fundamentales en los que el sector privado (especialmente Minesa) ha intervenido.

- **Sector salud:** el único puesto de salud existente en el municipio no cuenta con las instalaciones apropiadas para atender los potenciales accidentes que se asocian con las actividades mineras, ante ello, al presentarse accidentes durante actividades de galafardeo, barequeo u otro tipo de explotación minera es necesario desplazarse a Bucaramanga. En este contexto, el puesto de salud no suele ser el punto predilecto para la atención, a menos que se trate de una urgencia vital. Esto se relaciona con una problemática social que fue identificada durante el acercamiento a campo y es la baja natalidad registrada en el municipio. Muestra de ello, se evidencia en: “Es grave, por ejemplo, yo tengo el riesgo que aquí ya no están naciendo Californianos, se está desapareciendo el municipio” (Apéndice C, p. 68), este fenómeno se presenta no por una baja en la natalidad del municipio, sino que al tener un centro de salud deteriorado las mujeres embarazadas del municipio prefieren tener su parto en otro municipio.

El fenómeno expuesto hace que la cantidad de nacidos registrados sea menor al que existe en realidad. Por ello, en una perspectiva de largo plazo pueden presentarse inconvenientes con respecto a la categoría del municipio y pueda convertirse en un corregimiento municipal, lo que disminuiría la capacidad de decisión sobre presupuestos, manejo de instituciones y algunos otros efectos. De este modo, ante el panorama del sector salud, la comunidad ha creado una mesa de trabajo del GPS destinada a la articulación de trabajo y recursos para el mejoramiento de las instalaciones del puesto de salud, ante lo que Minesa ha respondido asumiendo los costos de la planta de trabajadores del hospital. “Yo de mamá

no me arriesgo a tener un hijo aquí, una cesárea, quien lo atiende e a uno aquí” (Apéndice

Tabla 5 Indicadores de salud recién nacidos

INDICADOR DE SALUD	CASOS 2015
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	1 nacido vivo nacido en otro municipio con bajo peso al nacer en 2015
Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado	No partos institucionales en 2015
Tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año) por 1000 nacidos vivos	No casos de mortalidad infantil en 2015
Porcentaje de nacidos con 4 o más controles prenatales	15 nacidos vivos con 4 o más controles prenatales (100%) en 2015
Tasa de mortalidad en menores de 5 años	No casos de mortalidad en 2015
Cinco primeras causas de mortalidad de niños y niñas	No casos de mortalidad en 2015
Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 15 años	No casos de mortalidad en 2015
Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 15 años	No casos de mortalidad en 2015
Razón de mortalidad materna	No casos de mortalidad materna en 2015
Porcentaje de mujeres que han sido madres o están embarazadas	20 mujeres embarazadas en 2015 15 mujeres que han sido madres en 2015
Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre las mujeres adolescentes actualmente unidas y no unidas sexualmente activas	18 mujeres en el programa de planificación familiar usando 2 de la totalidad de métodos de anticoncepción en 2015
Número de interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres menores de 18 años, en el marco de la sentencia C-355 de 2006	No casos de interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres menores de 18 años,
Tasa de mortalidad fetal	No casos de mortalidad fetal en 2015
Incidencia de sífilis congénita	No casos de sífilis congénita en 2015
Cinco primeras causas de morbilidad en niños y niñas (diferencias urgencias y consultas regulares)	Urgencias: EDA, IRA, dolor abdominal, traumas, otitis media aguda no supurativa. Consulta externa: EDA, IRA, IVU, enfermedades de piel, otitis media aguda no supurativa
Cobertura de tratamiento antiretroviral	No casos de VIH/SIDA en 2015

C, p. 70).

(Alcaldía municipal de California, 2016, p. 32)

- **Sector educación:** la educación de California encuentra una serie de tensiones identificadas por los miembros de la comunidad que se relacionan con el tipo de actividad laboral en la que se encuentra la mayor parte de la comunidad, puesto que existe una demanda generalizada por llevar formación técnica, tecnológica y superior al territorio y que no sea necesario el desplazamiento a otros lugares para continuar la educación de los

jóvenes californianos. En este sentido, la presencia del SENA ha aportado en la formación de bachilleres técnicos con énfasis en joyería. Sin embargo, no existe oferta educativa en temas como la profesionalización de las actividades mineras, agrícolas o al menos en el sector del turismo. Por ello, se identificaron dos problemas fundamentales: la deserción escolar y la existencia de barreras para acceder al sistema escolar (ver anexos). Con respecto a estas problemáticas el sector privado ha tomado medidas tales como ofrecer el servicio de transporte para los estudiantes que habitan en el sector rural y la puesta a disposición de la maquinaria propia para familiarizar a la comunidad con el manejo de estos equipos.

Sin embargo, las políticas públicas con respecto a este sector no permiten avizorar una inversión importante para mejorar la oferta del sector. Adicionalmente, las mismas estadísticas del plan de desarrollo creado por la administración actual muestra un cambio notorio al concluir la educación media y muestra un descenso en la asistencia a los grados de educación media (decimo y once), lo que puede relacionarse con la inserción al sector laboral por parte de los jóvenes en labores de galafardeo y barequeo, como se expuso con anterioridad.

Tabla 6 Acceso educativo discriminado por niveles

Grado	Matrícula	Edades (años)	Población	TCB
Preescolar	26	5 a 6	76	46,05%
Básica primaria	147	7 a 11	183	76,50%
Básica secundaria	95	12 a 15	145	65,52%
Media	43	16 a 17	74	64,86%
CLEI	44	-	-	-
Aceleración	0	-	-	-
Otros modelos educativos	24	-	-	-
Total	379	-	-	-

(Alcaldía municipal de California, 2016, p. 35)

Este sector, materializado en el Colegio Integrado San Antonio (como se mostró en el primer capítulo, este nombre no es elegido al azar), fue resaltado durante toda la estadía en campo como un recurso valioso dentro de la comunidad, pero se le describe como una institución con vínculos intermitentes. Por ello, su relación con el sector privado llama notoriamente la atención, en especial si ha de preguntarse el porqué de esta intervención.

- **Empleo:** la informalidad del empleo es una preocupación latente en el territorio, puesto que la mayoría de personas que se dedican al galafardeo, barequeo y al sector agropecuario lo hacen de manera informal, por lo que sus ingresos no son fijos y los aportes de seguridad social deben ser hechos de manera individual. En este sector la intervención del sector privado genera incertidumbre puesto que si el proyecto Angosturas entra en funcionamiento se proyecta la contratación de al menos 3000 personas durante el proceso de construcción y 1200 empleos durante la fase de explotación. Estas cifras en un municipio con una población total de 2006 habitantes (Alcaldía municipal de California, 2016) genera expectativas puesto una proliferación laboral es vista como el potencial para

mejorar la calidad de vida de la comunidad, pero también como un factor atractivo para la inmigración de personas provenientes de diferentes lugares. Este posible movimiento migratorio es visto como un potencial riesgo para el bienestar social.

“aquí durante toda la historia de California han habido empresas mineras llámense multinacionales, nacionales, y municipales, y alrededor del trabajo de la minería aquí siempre ha habido población flotante que viene exclusivamente por una oportunidad de trabajo y entonces, nosotros que somos de aquí, nacidos aquí, criados aquí, formados aquí y todo hemos siempre luchado con esa dificultad, lo que nos genera la falta de identidad de la persona que llega solamente por una oportunidad de trabajo” (Apéndice B, p. 48).

Con respecto a esta problemática, el sector privado ha tomado la iniciativa de fomentar los emprendimientos locales como restaurantes con los que han formalizado convenios para proveer la alimentación de quienes laboran en sus instalaciones, la creación de programas que incentiven la producción agropecuaria y la capacitación de miembros de la comunidad en temas de turismo y protección del medio ambiente entre otros. De este modo, el sector privado se encuentra a la vanguardia en la intervención del sector laboral del territorio. Mientras las instituciones estatales se han enfocado en el fortalecimiento del sector turístico en el municipio y ha creado alianzas con el sector privado para dinamizar la comunicación entre la oferta y la demanda laboral en todos los sectores a través de la “Mesa de Empleabilidad” (Alcaldía municipal de California, 2016, p. 43). Sin embargo, esta mesa cuenta con el sector minero como principal generador de empleo, lo que concibe dependencia de este sector para la vinculación laboral.

En este sector, es notoria de nuevo la intervención del sector privado como principal actor en las intervenciones enfocadas al mejoramiento de la calidad de vida de los californianos. Ante un escenario de mayor efectividad y disponibilidad económica, las demandas sociales suelen ir directamente al sector privado generando subordinación a este para la solución de las mismas y además incertidumbre en el caso de que el proyecto Angosturas no entre en operación.

La relación de poder que ejerce el sector privado en California se relaciona con lo que Gudynas (2003) define como la expansión del mercado, pues se trata de la entrada de la lógica del mercado en la cotidianidad de las comunidades. En este sentido, las instituciones estatales se presentan como simples entidades que proveen infraestructura y proporcionan un marco legal para el comportamiento del sector privado, pero en la práctica quienes determinan el viraje de la economía del territorio, promueven el crecimiento de los sectores económicos atrasados y generan canales de interlocución con la comunidad. En el caso de California, se trata del control general del sector social por parte de las empresas y su lógica, por lo que el Estado es dejado en un segundo plano debido a un historial de incumplimiento en sus deberes y una serie de demandas sociales insatisfechas.

“Asumiendo que es la codicia la que mueve el proceso humano, las instituciones, aun las naciones, son reducidas a una compañía, y los ciudadanos a accionistas buscando su ventaja personal. En tanto el proceso básico es el beneficio personal, comportarse egoístamente no está mal en sí mismo, sino que lo que está mal son las condiciones que lo permiten o alientan” (Gudynas, 2003, p. 108).

2.4 Papel de la “empresa” en California y su papel en la perspectiva del territorio

Como se ha analizado a lo largo de este documento, el sector privado ha adquirido un protagonismo central en la organización actual del sistema económico, político y social (Dávalos P. , 2013). Este poder adquirido se fundamenta en el discurso del desarrollo (Escobar, 2007), la disminución de la desigualdad (Pikkety, 2014), la libertad (Friedman & Friedman, 1983) y el rendimiento (Han, 2012); en el caso de California el nodo principal de acción y organización es Minesa S.A.S. que siempre es reconocido como “la empresa”. Su centralidad en la estructura de poder del territorio se relaciona con la disponibilidad de capital económico y la articulación que ha desarrollado con las demás instituciones, esta dinámica genera subordinación de los demás nodos y crea dependencia de este nodo céntrico.

En consecuencia, la comunidad californiana se ha organizado alrededor de la actuación de Minesa como determinante de la proyección del territorio, esta subordinación ha generado un proceso de dinamización de la economía a través del incentivo a diferentes sectores económicos, pero ha sido forjado en medio de una incertidumbre generalizada, puesto que la proyección del municipio se ha determinado con el supuesto de la entrada en funcionamiento del proyecto Angosturas como soporte. A partir de la llegada de este actor al territorio, se han identificado 3 escenarios en los que se determinan cuatro actores centrales (Minesa, Estado, Familias y Comunidad) y el papel de cada uno parece estar dirigido por la actuación de Minesa.

Tabla 7 Escenarios proyectados de acuerdo a papel de Minesa (elaboración propia)

Escenario	Actuación de Minesa	Actor	Problemas potenciales	Beneficios potenciales
1	Aprobación de licencia ambiental y entrada en funcionamiento de proyecto Angosturas	Estado	*Desarticulación de programas sociales. *Exceso de dependencia de fondos privados	*Mayor disponibilidad de fondos por parte de regalías e impuestos. *Posibilidad de generar articulación intersectorial.

				*Aumento en oferta educativa
		Familias	*Posibilidad de aumento en desintegración familiar por migración de trabajadores. *Temor por el posible aumento en embarazo de adolescentes y deserción escolar	*Aumento en la vinculación laboral formal. *Mayor posibilidad de acceder a niveles de educación superior. *Aumento en los ingresos promedio de las familias californianas
		Comunidad	*Posibilidad de crearse una oferta mayor de sustancias psicoactivas. *Vinculación generalizada en el sector minero, por tanto, disminución en la poca producción agrícola. *Aumento constante en el costo de vida.	*Impulso a sectores económicos como el comercio y prestación de servicios. *Disminución en la tasa de desempleo. *Mejoras en la infraestructura del municipio.
2	No aprobación de licencia ambiental y salida de Minesa del territorio	Estado	*Posibilidad de procesos legales ante la imposibilidad de explotar el proyecto. *Disminución de fondos correspondientes a regalías. *Necesidad de reglamentar la explotación minera a través de galafardeo y barequeo. *Disminución en presencia de ejercito enfocado en la protección del sector privado.	*Mayor control de los fondos públicos ante el aumento en la demanda de servicios. *Espacio para fortalecer la comunicación entre comunidad en instituciones. *Mayor incentivación de otros sectores laborales como agricultura y turismo.

		Familias	<p>*Aumento de desempleo y dificultad en acceder a la canasta básica familiar.</p> <p>*Aumento en la deserción escolar para entrar al galafardeo y barequeo.</p> <p>*Disminución en posibilidades de acceder a formación superior</p>	<p>*Menor riesgo de llegada de trabajadores foráneos.</p> <p>*Disminución en probabilidades de aumento de divorcios.</p> <p>*Posibilidad de mantener propiedad sobre tierra.</p>
		Comunidad	<p>*Aumento en la utilización de sustancias como Mercurio y Cianuro para actividades minera.</p> <p>*Aumento en la informalidad.</p> <p>*Posibilidad de crear una migración general ante panorama económico incierto.</p> <p>*Posible aumento de inseguridad y llegada de grupos armados a la zona</p>	<p>*Menor probabilidad de aumento en oferta de sustancias psicoactivas.</p> <p>*Mayor posibilidad de vender oro sin necesidad de intermediarios.</p> <p>*Menor presencia de grupos religiosos diferentes al catolicismo.</p>
3	No aprobación de licencia ambiental y permanencia parcial de operación	Estado	<p>*Incertidumbre con respecto a las acciones a tomar y congelamiento de fondos provenientes de Minesa.</p> <p>*Mayor demanda de la comunidad por la cobertura de necesidades básicas.</p> <p>*Aumento en problemáticas ambientales y sociales asociadas a la minería informal.</p>	<p>*Permanencia parcial del batallón destinado al cuidado del proyecto y la seguridad privada contratada por Minesa.</p> <p>*Continuidad en algunos programas sociales diseñados por la empresa.</p> <p>*Mayor interés por parte de las instituciones departamentales y nacionales por el municipio.</p>
		Familias	<p>*Disminución en los fondos destinados para mejorar el acceso a educación superior.</p>	<p>*Sostenimiento al menos de forma temporal en condiciones de seguridad.</p>

			*Disminución en el empleo formal. *Ralentización del sector comercial. *Aumento en la deserción escolar	*Menor migración de jóvenes para estudiar fuera del territorio. *Menor posibilidad de aumento en embarazos adolescentes y divorcios.
		Comunidad	*Aumento en informalidad laboral. *Posible migración de buena parte de la población ante panorama laboral. *Dificultades para dar continuidad a quienes se encuentran vinculados con programas sociales de Minesa	*Posibilidad de generar mayor vinculación entre comunidad e instituciones estatales. *Posible articulación de más miembros al sector agropecuario.

Estos escenarios han sido contruidos a partir de la triangulación de información contruida durante los dos acercamientos a campo, la sistematización del diario de campo y la búsqueda de archivo realizada durante el proceso de investigación. A partir de ese proceso, es posible ajustar la lectura del presente para proyectar escenarios futuros a través de la metodología de Miklos en la que se busca el futurible o “escenario deseable y factible” (Miklos, 2002, p. 123), en este caso se trata de aquel en que Minesa logra obtener su licencia ambiental.

Sin embargo, la construcción de este escenario aporta pistas sobre el modo en que Minesa se ha convertido en el centro de las interacciones institucionales y su acción ha permeado todas las dimensiones de la comunidad. Sin duda, se trata de la expansión del mercado (Gudynas, Ecología, economía y Ética del desarrollo sostenible, 2003) en la cotidianidad, esta expansión se conjuga con la desterritorialización del Estado (Schuldt & Acosta, 2009) y una tendencia a reproducir el postcontractualismo (Santos B. D., 2004); todos estos factores conducen a la comunidad

californiana a vivir en una paradoja en la que existen una serie de incertidumbres y temores con respecto a los efectos que pueda producir el modelo de explotación propuesto por Minesa.

Ahora bien, al encontrarse en una posición de desprotección por parte de las instituciones estatales, se proyecta un escenario en el que sea posible articular la potencialidad de los recursos que existen en el territorio y a través de iniciativas como el GPS lograr el establecimiento de canales comunicativos efectivos entre los actores principales.” Construir a futuro para cuando las empresas mineras se hayan ido, porque ahí vamos a ser autosostenibles o sea vamos a sostenernos en el tiempo eso es lo que se quiere hacer” (Apéndice C, p. 107). Esta visión de autosostenibilidad también ha requerido un proceso de reflexión con respecto a la proyección del municipio en términos, económicos, políticos y culturales; requiere un replanteamiento con respecto al modelo de extractivismo depredador en el que se encuentra y trascender a un enfoque humanista del desarrollo con nociones como la de Buen Vivir (Escobar, 2015) o extractivismo indispensable (Gudynas, 2011).

“Los actuales niveles de sobreconsumo, especialmente aquel que es superfluo y banal, deben ser abandonados. La calidad de vida deja de ser entendida como una simple acumulación de bienes materiales, para ser ampliada a dimensiones culturales, afectivas, espirituales, etc., y la opulencia ya no es motivo de festejo” (Gudynas, 2011, p. 393).

Por ello, las iniciativas sociales como el GPS pueden ser un primer paso en este proceso reflexivo, siempre y cuando no dé prioridad a intereses particulares. Estas instituciones pueden ser categorizadas como lo que Escobar (2015) llama luchas ontológicas, en las que es posible repensar el mundo y crear espacios en los que converjan distintas voces para generar bienestar en una visión amplia del mismo y por tanto yendo más allá de la dimensión económica de la vida.

Si ha de continuarse con la lógica propuesta por Miklos (2002) y su metodología de futuribles, es posible entender que el tercer escenario puede ser calificado como el futuro utópico o deseable, pues parte de una lógica casi irrealizable, pues parte de una premisa posible, pero poco probable, la permanencia de Minesa en el territorio a pesar de la negativa a su propuesta para el proyecto Angosturas, pues esto podría generar la permanencia de los empleos generados, la continuidad de las políticas sociales, la interacción con movimientos sociales como el GPS y la articulación de las instituciones públicas y privadas para garantizar la mejoría en las condiciones de vida de la comunidad californiana. Este escenario es concebido como utópico, pues la negativa a la licencia ambiental presentada sería un motivador a la salida expresa de Minesa, lo que causaría una profunda sensación de incertidumbre en la comunidad de California, adicionalmente, prácticas como el galafardeo y barequeo aumentarán de manera significativa, puesto que muchos de los actuales empleados de Minesa volverán a realizar este tipo de labores.

Así, de entre todos los futuros concebibles dentro del espacio acotable de la prospectiva, es posible visualizar, diseñar y hasta construir aquel que combine lo más armónica, holística y estratégicamente posible, elementos, variables e indicadores provenientes de dos acercamientos metodológicos: lo deseable y lo factible (Miklos, 2002, p. 122).

Puede entenderse este escenario futurible como utópico, porque las condiciones para que este se dé son poco probables. En tanto, el segundo escenario planteado puede ser catalogado como catastrófico o indeseable ya que la salida inmediata de Minesa supone el despido de todos sus empleados, la interrupción de todos los programas sociales ejecutados y los proyectados, un aumento desbordado de los tipos de minería que ya se conocen, pero también el aumento en uso

de sustancias como el Mercurio y Cianuro para el procesamiento de los materiales extraídos. Es posible decir que este escenario no solo es catastrófico, sino que es factible o probable en caso de que un hecho específico se produzca, de este modo, la proyección del territorio analizado se encuentra en una condición límite, pues depende de la injerencia de un actor clave, pero demuestra poca capacidad de agencia por parte de los demás actores presentes en el territorio para generar estrategias de adaptación que generen mejores condiciones de vida para los miembros de la comunidad. Puesto que se trata de un territorio clave, cuyas acciones pueden tener efectos notorios sobre las condiciones de habitabilidad de diferentes comunidades, como los habitantes de Bucaramanga y demás territorios de la región de Soto Norte.

3. Derechos humanos y de los niños relacionados con alimentación

Al igual que los demás temas que han sido abordados a lo largo de esta investigación, los derechos humanos serán abordados desde una visión crítica, por tanto, se trata de un tema abierto a la discusión y no visto como un paradigma absolutista. Dicho esto, la concepción de los derechos como derecho natural (1987), tiene como trasfondo el otorgamiento de algo a todos por el hecho de nacer humanos y este algo es inherente, sin importar la cultura o espacio social en que se encuentren, pues se trata de principios naturales. Sin embargo, autores como Nino (1984), presentan estos derechos como reglas de un sistema moral, y es ahí cuando la discusión genera aún más aristas, pues la moral no es una construcción dada, sino que se construye de manera contextual. Por ello, sigue siendo una interpretación positivista en la que los derechos son normas universalmente válidas.

Ante la inquietud moral parece que los derechos humanos trascienden a las normas construidas y por tanto las normas deberían construirse alrededor de los derechos, con la finalidad no solo de protegerlos, sino generar las herramientas para permitir su cumplimiento.

Ahora bien, la existencia de derechos implica que existe un deber o un sujeto que tiene compromisos para la protección de los derechos. En este sentido Manfred Liebel aseguraba durante una intervención en el Seminario Especial enfocado en los derechos de la infancia en el desarrollo de la Maestría en Estudios de Familia que “los derechos son peticiones” y es tal vez la definición más clara y abarcadora sobre este tema. Sin duda, se trata de una serie de obligaciones sobre las que existen garantes encargados de procurar su cumplimiento de manera universal, en este sentido, se conjugan de manera clara la existencia de garantes para el cumplimiento de los derechos con los actores identificados durante la investigación ejecutada en California, puesto que el sector

privado, el Estado, la familia y la comunidad son actores fundamentales en la implantación del discurso proteccionista de los derechos.

En consecuencia, dentro de la constante reflexión sobre derechos y obligaciones, se han determinado derechos particulares para aquellas comunidades especialmente vulnerables. En el caso de los niños se trata de sujetos de derecho (tal vez uno de los avances más importante en la Convención de los Derechos del Niño) sobre quienes existe una jurisdicción especial que se antepone a todos los demás. Es decir, sus derechos deben ser asegurados subordinando los demás derechos bajo la figura del “interés superior del niño”. Entonces, habría que problematizar la noción de niñez (Rodriguez, 2004), juventud y adultez (Aries, 1984) que existe en cada contexto para entender la necesidad y capacidad de aplicación de estos derechos. Allí, Liebel crea un paralelo particular entre derechos objetivos y subjetivos, “debemos distinguir entre la totalidad de las normas jurídicas de una sociedad (‘derecho objetivo’) y los derechos individuales que, normalmente, son reclamables (‘derecho subjetivo’)” (Liebel & Muñoz, 2009, p. 15). Estos derechos que son reclamables parten del postulado de que las instituciones o actores encargados de su defensa deben trabajar siempre para la protección de los ciudadanos y en ningún momento vulnerar sus condiciones (UNICEF, 2007). Sin embargo, este postulado no siempre se cumple, como se ha mostrado en las páginas previas.

En el caso de California, esta tensión entre los derechos objetivos y subjetivos es clara, si se consideran varios fenómenos particulares; en primer lugar, la subordinación de los intereses familiares y comunitarios a los intereses económicos encarnados en el modelo neoextractivista y que se evidencia en la manera en que se ha priorizado de manera histórica la inversión estatal y privada en la protección de los intereses particulares, mientras que no se ha priorizado la inversión en la satisfacción de necesidades básicas para los distintos actores que componen las familias. En

segunda instancia, esta priorización genera una tensión en los distintos grupos etarios, puesto que en muchas ocasiones los esfuerzos por mejorar las condiciones sociales de grupos focalizados evitan en algunas ocasiones la concepción del bienestar o buen vivir como una categoría sistémica en la que las condiciones de vida de los miembros de un grupo social no pueden ser entendidas ni intervenidas de manera aislada.

Ante este panorama, es posible pensar que los derechos no son algo dado, sino que su cumplimiento es posible a través de la articulación de las distintas voces, para trascender la dimensión legislativa y convertirse en hechos tangibles. El caso de la alimentación se da en un panorama particular puesto que la tensión entre la producción de alimentos y mercancías suele inclinarse en muchas ocasiones hacia el mantenimiento del modelo de consumo, sobre ello, es importante analizar la forma en que Unicef vislumbra la importancia que tiene la alimentación en el desarrollo y la seguridad de los niños en zonas mineras. “Dependencia de vitaminas y minerales que se encuentran en los alimentos; la desnutrición podría afectar el desarrollo cerebral y físico” (UNICEF, 2017, p. 114). Sin embargo, en ningún momento se hace referencia a la importancia que tiene la seguridad alimentaria para el desarrollo infantil, pero también para la comunidad en general. Como se ha visto, no solo se trata de la satisfacción de una necesidad básica, sino de un fenómeno de impacto social, político y económico.

Si se toma como referente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en ella se hace mención a la alimentación como uno de los componentes básicos del bienestar en su artículo 25 y en la Convención de los Derechos del Niño el artículo 24 comenta la importancia de combatir la malnutrición. Sin embargo, al proponer una lectura sistémica de los fenómenos sociales, es inevitable incluir estas declaraciones como exigencias en bloque y por tanto como un sistema articulado en el que las acciones tomadas para su implementación deberían ser diseñadas de forma

integral. Tal vez es allí, en la implementación de acción donde los distintos actores sociales erigidos como garantes encuentran la complejidad de efectuar y realmente cumplir su papel como garante. En primer lugar, porque se trata de una tensión constante entre la lógica de acumulación de capital y los intereses que aseguran un verdadero bienestar de lo que se define como la familia humana. En segunda instancia, la complejidad de llevar unos principios universales a contextos que ven su devenir marcado por historias completamente diferentes y condiciones de vida complementarias pero particulares en su unicidad.

Por todo lo anterior, vale la pena generar una comprensión de los fenómenos realmente partiendo desde su indivisibilidad e interconectividad, puesto que la búsqueda del cumplimiento de todos los derechos parte de un cambio ontológico de la comunidad en la que busque generar bienestar y desarrollo (también es un derecho) a partir de la construcción de una comunidad interconectada y solidaria.

La alimentación como derecho pueden ser un instrumento poderoso de orden ético y jurídico para mejorar la situación del hambre en el mundo, pues además de constituirse en orientación de las políticas de los gobiernos, permite a los actores de la sociedad civil poner de manifiesto sus derechos e intereses y exigir responsabilidades a sus gobiernos (de Loma-Ossorio, 2008, p. 9).

La exigencia de estos derechos no solo a los gobiernos, sino que se debe buscar una articulación de todos los actores, públicos, privados, individuales y colectivos para generar condiciones que permitan el paso de documentos a realidades. Este llamado que parece ser repetitivo o primario, es en realidad un ejercicio enfocado a visibilizar los escenarios que se han prospectado por parte de diversos autores y cuya abanderada es Viviane Forrester, que al analizar lo que define como el

“horror económico” realiza una suerte de denuncia con respecto a las condiciones a las que nos enfrentamos ante la sistemática eliminación del empleo y cuyas consecuencias se evidencian en un panorama social con garantías sociales cada día más reducidas, condiciones de vida cada vez más inequitativas y ante todo un alejamiento constante del cumplimiento de los derechos humanos en todos los contextos.

3.1 Situación de los niños y jóvenes con respecto a la alimentación

Ante el panorama expresado con anterioridad, en el caso de California los niños y jóvenes como en muchas comunidades no se encuentran ajenos de las dinámicas alimenticias que existen en sus territorios, por ello su cotidianidad transcurre consecuentemente con el panorama que se describió durante el segundo capítulo. Sin embargo, es posible distinguir la existencia de dos grupos que coexisten y cuentan con puntos de encuentro y socialización.

El primer grupo está compuesto por aquellos niños y jóvenes que crecen en entornos familiares agrícolas, en este grupo suele existir una relación con el trabajo desde edades tempranas puesto que sus labores incluyen desde el cuidado de animales, hasta la remoción de la hierbas y asistencia en la recolección de las cosechas. En el caso de las familias californianas, estas actividades suelen tener su génesis alrededor de los 6 años, aunque desde más pequeños acompañan a sus padres o cuidadores a recorrer los terrenos y realizar sus actividades diarias. En este contexto el trabajo de los niños es visto como algo natural, por lo que existe una lectura del trabajo como una manera de reproducir los conocimientos acumulados con respecto a una actividad que es limitada en su contexto.

Si se leyera desde una perspectiva positivista de los derechos de los niños, esta actividad podría ser considerada como el claro accionar de la explotación laboral, puesto que generalmente no existe un pago para quienes realizan estas actividades, sino que se ve como una manera de articular

a todos los miembros de la familia en la generación de capital. Por ello nunca se habla del trabajo de este grupo, sino que se le entiende como “ayuda”.

El segundo grupo de niños y jóvenes hace parte de las familias que se desempeñan en el sector minero de manera formal e informal y quienes se dedican al comercio. En este grupo, los niños entre 0 y 12 años suelen dedicar su tiempo a labores escolares y labores de cuidado relativas al aseo y cuidado del hogar. Existe una división casi general con respecto al sexo y los roles de género asignados, puesto que las labores relacionadas con el cuidado de los miembros más pequeños, así como la cocción de alimentos suelen estar relacionados con las mujeres más jóvenes, mientras que los hombres suelen encargarse del mantenimiento de la infraestructura del hogar y labores como el cuidado en el espacio público de sus familiares. Debe aclararse que no se trata de una relación inherente, sino que es una generalidad, por lo que no en todos casos existe esta distinción de roles. Ahora bien, entre los 13 y 15 años suele presentarse la entrada de este grupo de jóvenes a labores relacionadas con la minería ya sea al interior de los socavones, o por fuera de ellos, en el área de procesamiento del material o “molinos”. Estas actividades usualmente generan ingresos para los jóvenes que las realizan, pero no es comparable con los ingresos que generan los adultos, pues existe un mayor conocimiento del mercado en el que se insertan los materiales extraídos, existe al igual que en el primer grupo una noción del trabajo de estos jóvenes como una “ayuda” y actividad secundaria, por lo que la mayor parte del tiempo sus actividades giran alrededor de la educación. El ambiente educativo es un punto de convergencia de estos niños y jóvenes; allí se presenta una relación con la alimentación particular, puesto que se encuentran subordinados a la oferta que da el sistema educativo. En la escuela San Antonio según comento una antigua maestra de la escuela, se presentó hace algunos años un programa para motivar el acercamiento de todos los niños y jóvenes con la agricultura y a partir de este generar un mayor interés por la producción de alimentos

de manera familiar. “hace unos años presentamos un proyecto para que cada niño tuviera una chagra en su casa, que cuidaran unos tomates o frutas, pero nadie nos siguió la corriente” (Diario de campo, p. 3). Esta iniciativa sugiere que existe una preocupación por la seguridad alimentaria del municipio, en la que se entiende a los más jóvenes del territorio como los medios más efectivos para la reproducción de conocimientos asociados a la producción de alimentos. Sin embargo, ante un panorama de mayores ingresos provenientes de labores mineras los niños y jóvenes prefieren realizar labores extractivas. Lo que es un reflejo de la contradicción en la que se encuentra el Estado colombiano en lo referente a la producción de alimentos y el paradigma neo extractivista. Sobre este tipo de situaciones existen varios análisis y ante ello la importancia de incorporar una concepción del trabajo y de la remuneración que se entiende como justa para los niños y jóvenes. El trabajo de los niños ha sido uno de los nodos generadores de tensión más sobresaliente en espacios académicos y políticos, puesto que ha creado toda una gama de posiciones con respecto a las acciones que deben ser tomadas con respecto a los niños y jóvenes trabajadores. En estas, pueden denotarse al menos dos posiciones consolidadas o en proceso de consolidar. Por parte de muchas instituciones la posición abolicionista se impone como discurso protector de los niños y jóvenes, dado que concibe el trabajo como una forma de violencia hacia esta población, pues pone en duda el cumplimiento de sus derechos, esta posición suele basar su férrea perspectiva en la defensa de los derechos de los niños consignada en la declaración de los Derechos de los Niños y la noción de desarrollo como bandera, puesto que se considera al trabajo pago como una condena de las familias, que restringe la movilidad social.

“el trabajo infantil afecta negativamente la educación, la salud y la seguridad ocupacional y personal de los niños. También puede contribuir a perpetuar la

condición de pobreza de las familias que, por necesidad, se ven obligados a enviar a sus hijos menores a trabajar” (Verdera, 1995, p. 113).

Otra posición epistémica con respecto al trabajo infantil es la denominada proteccionista, cuya premisa esencial es crear una valoración crítica del trabajo, en la protección de los niños y jóvenes, puesto que no se encuentra en la prohibición del trabajo (entendido como derecho humano), sino que la protección debe incluir su dimensión de sujetos que pueden trabajar y por tanto, la protección debe incluir los espacios laborales, generando una suerte de espacio protector general, en el que se debe articular a los diferentes actores involucradas en la cotidianidad.

“queremos dejar claro que para nosotros el paradigma que articula nuestra practica y nuestra reflexión no es en primer término la protección, sino el trabajo como un derecho humano del que se deriva la exigencia de protección, dentro del cual esta recupera un sentido valorativo del trabajo y puede sortear mejor el riesgo proteccionista” (Cussianovich, 1995, p. 37).

En estas posiciones más que una disertación con respecto a un fenómeno particular como el trabajo subyace una distancia clara con respecto al papel de los niños y jóvenes (Pacherres, 2000), pues se les asigna una condición de subalternidad o de sujetos de derechos con capacidad de agencia. Es importante declarar un acuerdo por parte de quien escribe este documento con la valoración crítica del trabajo, particularmente en relación con el contexto de California y la manera en que se da la cotidianidad de los niños y jóvenes en este territorio.

Como se describió en las líneas previas, el trabajo de los niños y jóvenes no es un fenómeno ajeno a la cultura californiana, por ello, una visión abolicionista propondría la intervención por parte de instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales enfocada a la eliminación de estas

prácticas. Sin embargo, como se ha expresado, más que el trabajo, la experiencia en los distintos modos productivos se erige como un pilar de la vida en comunidad y la reproducción de lo que se denomina “ser californiano”. En este territorio, el trabajo infantil parece ser una etapa normal del desarrollo y por tanto necesaria, parece existir un acuerdo no escrito, pero si practico por parte de las instituciones estatales por enfocar su atención hacia la prevención y atención de fenómenos como la violencia intrafamiliar o temas de explotación sexual, pero poca focalización hacia la eliminación de estas prácticas, pues parece existir un respeto por la educación no formal que es adquirida a través de la relación cercana con el trabajo.

Como se declaró anteriormente, el papel del sector privado es crucial en el desarrollo de la cotidianidad del territorio y este no se encuentra alejado de un tema tan complejo como la vinculación de menores de edad a labores extractivas. En este sentido, se ha promulgado una posición de tolerancia cero hacia cualquier participación de niños y jóvenes en cualquiera de los eslabones que componen la cadena de valor, esto significa, poner en duda la vinculación laboral de quienes permitan el trabajo de sus hijos o familiares. Estas medidas son tomadas a partir de un discurso evidentemente amparado en la protección de los menores de edad. Sin embargo, este se convierte en la piedra fundante de las acciones tomadas y los programas diseñados.

En consecuencia, las actividades en las que el sector privado, particularmente Minesa, se enfocan en generar o promover acciones “proteccionistas” en el entorno de los menores de edad cuentan con una mínima o inexistente visión de generar mecanismos de participación en este grupo particular. Es común, entender las metodologías de participación como la facilitación de espacios en los que los niños y jóvenes expresen sus ideas y pensamientos con respecto a fenómenos que evidentemente los afectan tanto a ellos como a sus familias, pero cuyo efecto en términos

pragmáticos no tiene relevancia en la forma como se planifica el manejo de las condiciones sociales.

Este comportamiento de constante eliminación de las voces expresadas por menores de edad se da de manera sincrónica en las instituciones estatales, en las que la protección de los niños se entiende como una delimitación de su espacio de acción en unos cuantos espacios determinados, se supone la infancia y juventud de los californianos deben transcurrir allí, entiéndase por estos espacios a la escuela, los parques y sus hogares. Sin embargo, al concebir mecanismos de participación y el deber que existe por parte de todos los actores garantes de los derechos, parece que estos identificaran las acciones de participación como la asignación de labores, pero siempre a partir de diminutivos que los deja siempre como esfuerzos fútiles por el conocimiento de la experiencia “adulta”. En otros términos, las estrategias de participación parecen limitarse a realizar grupos de “mineritos”. “alcalditos” y cualquier otra labor en diminutivo, esta posición de poder evidentemente deja en claro una visión subalterna de los menores de edad y cuyas opiniones o posicionamientos políticos son vistos como una anécdota jocosa, pero sin mayor trascendencia.

Este comportamiento se expresa en muchos espacios, no solo en California, sino que se ha vuelto casi un comportamiento sistemático en todas las instituciones estatales, un referente puede ser los debates presidenciales que se organizan con niños y en donde es importante recalcar que no suelen asistir todos los candidatos, ello puede ser la muestra de un desinterés claro por las expectativas que expresa esta población, puesto que sus ambiciones y proyectos políticos no son relevantes al no ser votantes efectivos, sino potenciales.

En este panorama, se desarrolla la niñez y juventud de los californianos, se trata de un terreno en el que abunda la inversión enfocada a la protección de los niños, pero en donde la participación de los menores de edad es vista como un espacio irrelevante. Esta posición política y epistémica cubre

a las instituciones públicas y privadas, pero también ha tocado a las familias, puesto que la posición de los niños y jóvenes (al menos en aquellas familias que pudieron ser conocidas durante la etapa de campo) se han erigido como espacios de control, en los que los menores de edad se convierten constantemente en veletas que responden a los intereses del grupo y cuya dimensión individual o subjetiva debe amoldarse a los intereses que imponen los padres o cuidadores, en quienes recaen las decisiones significativas, pues ellos “saben lo que es mejor para los niños”, aun sin conocer cuáles son los deseos de esos niños que se convierten en testigos silenciosos de las decisiones que toman otros sobre su futuro, esta posición es la más adecuada para describir la situación de la comunidad en general del territorio californiano, puesto que se encuentran en una constante incertidumbre de lo que decidirán los grupos políticos del país con respecto a Angosturas, se trata sin duda de una posición subalterna con respecto a su devenir y si saldrán hoy o no las piezas doradas que se encuentran ocultas en las montañas de California.

Sin duda, podría pensarse que las familias de este territorio se encuentran en la misma posición que los niños y jóvenes, las instituciones limitan sus acciones a desarrollar grupos en los que los diferentes actores del territorio pueden expresar sus ideas, pero cuyos resultados son irrelevantes ante un modelo económico que con la excusa de proteger la libertad y la autonomía toman decisiones sin dar relevancia a los deseos expresados por estas comunidades mineras y campesinas. Como lo expresa Buitrago (2012), las comunidades que habitan en territorios de alta concentración de riquezas naturales suelen ser silenciadas ante los intereses del gran capital, pero también de aquellos grupos ecologistas que pregonan el cuidado de los ecosistemas como si se tratara de territorios vírgenes en donde las comunidades habitantes de estos lugares deben adaptarse a la forma de habitar que ellos proponen. Sin duda, la visión “abolicionista” de los

derechos de los niños trasciende una aplicación exclusiva a los menores de edad y cobija a comunidades enteras como sucede en este territorio.

Así las cosas, si ha de estudiarse las condiciones de vida de las familias en California es fundamental entender estas posición de protección y poca participación que se impone, no solo hacia los niños, sino para todas estas familias, que encuentran un complemento curioso en un modelo económico basado en el neoextractivismo, en lo que nuevamente se convierte en una contradicción constante, puesto que se exige por parte de estas comunidades la defensa del agua, de sus territorios, pero se crea un modelo económico basado en la explotación de los recursos naturales que se encuentran en estos mismos espacios. Se les pide a estas comunidades eliminar prácticas de explotación minera tradicional, pero se vende la idea de que al entrar las grandes mineras al territorio existirá una diáspora laboral, en la que una parte mayoritaria encontrara posiciones laborales estables. Pero, para que esta promesa llegue a realizarse deben adaptarse a formas de producción diferentes y nuevamente dejar de reproducir sus conocimientos.

En todo este panorama, las practicas alimenticias se reproducen dentro de un esquema mayoritario de consumidores y pocos productores, de cobertura de necesidades atravesada por condiciones económicas en las que los escasos productores agrícolas ven cada vez más alejadas a las próximas generaciones por la imposición de un discurso basado en la protección de los derechos de los niños, pero en donde la participación queda limitada a unos pocos espacios de conversación y una inexistente participación política. Es decir, la cotidianidad en California, Santander transcurre en medio de constantes contradicciones de las que santos como San Antonio de Padua parecen ser los únicos actores del territorio que interlocutan con las prácticas y creencias del territorio.

Probablemente, los derechos de los niños y jóvenes californianos seguirán siendo “protegidos” a través de estrategias enfocadas a estar cercados en instituciones como la escuela y el hogar, pero

sin un verdadero reconocimiento de ellos como actores políticos válidos, en este territorio la categoría de participación es entendida como la reproducción de categorías subordinadas en las que las ideas expresadas por los menores de edad son solo ocurrencias o comentarios graciosos, pero sin un verdadero reconocimiento de sus intereses.

4. Conclusiones

El caso de California puede ser expresado como un microcosmos en el que se refleja la cotidianidad del panorama global y nacional. En este microcosmos, las practicas alimenticias son posibles a partir de la interacción de sistemas económicos, políticos y sociales particulares que se articulan con una serie de creencias, estereotipos y arquetipos que se construyen y adaptan constantemente a las condiciones del contexto.

Seguridad alimentaria: En el municipio de California, la producción de alimentos es puesta en un segundo plano frente a los beneficios económicos que genera la explotación de materias primas. Siendo una muestra de lo que sucede en la economía colombiana, pues se concibe el desarrollo como un punto de llegada en el que las rentas provenientes de actividades extractivistas son puestas como prioridad, esto hace que la producción de alimentos sea puesta en un segundo nivel de prioridad, con lo que esto implica: dar prioridad a la disponibilidad de agua para los sectores extractivos y la disminución en inversión que permita aumentar la competitividad del sector agropecuario. Sin embargo, se presentan algunos movimientos de resistencia que buscan cambiar el panorama del territorio a través de la producción agropecuaria a pesar de existir un imaginario de estas labores como limitadas a los sectores más pobres de la comunidad.

Si se interpreta el panorama de California a partir de la definición de la FAO con respecto a la seguridad alimentaria, no es posible asegurar que se trate de un municipio que vea obstaculizado su acceso a alimentos de manera constante. Sin embargo, si se analiza su situación de manera profunda, existen condiciones que no permiten la distribución y acceso de alimentos a todos los grupos sociales, pues la condición económica es un factor diferenciador al momento de acceder a los alimentos deseados. Adicionalmente, si se pensara en términos de soberanía alimentaria, no

hay posibilidades de asegurar que en los próximos años aumente la producción de alimentos y mucho menos que haya libertad de escoger lo que se cultiva.

El cuidado de la tierra o la explotación de la misma: como se mencionó a lo largo del documento, parecen existir distinciones sociales y económicas relacionadas con la relación que establecen las familias californianas con la tierra, dado que quienes desempeñan actividades extractivas son vistos como potenciales generadores de riqueza; en este sector de la población la riqueza está asociada al trabajo intensivo realizado de manera irregular, ya que la producción de capital es posible de acuerdo a la cantidad de tiempo que esté dispuesto a invertir cada sujeto. En la otra orilla del espectro se encuentran las familias agricultoras que dependen del cuidado de la tierra y cuya dedicación laboral debe ser constante para lograr la acumulación de riqueza, en este sentido (al menos para las familias mineras) la riqueza no tiene una relación directa con la cantidad de trabajo invertida, sino que existen factores externos que influyen en la acumulación de capital, tales como la fortuna y el manejo de la avaricia que son mediados a través del accionar de sujetos con relevancia contextual como San Antonio de Padua.

En consecuencia, la relación con la tierra determina la concepción social de las familias, pues esta vinculación establece de cierta manera la proyección económica de las mismas. Además, se genera un paralelo geográfico, en el que la visión neoextractivista del Estado colombiano genera condiciones que dificultan de manera notoria la posibilidad de generar seguridad alimentaria en el territorio. No existe infraestructura que permita la distribución de los alimentos cultivados, por el contrario, la infraestructura creada está enfocada en disminuir la cantidad de tiempo necesario para la movilización de los materiales provenientes de la actividad minera.

Es por ello, que la propiedad de la tierra y el uso que se le da son factores de importancia significativa en la cotidianidad californiana, a partir de este factor se generan distinciones de clase,

ingresos y roles de género. Es decir, para entender las dinámicas sociales en este territorio es fundamental indagar con respecto a la relación que existe entre la tierra, los sujetos y la manera en que esta determina su ubicación en el sistema social. En consecuencia, se invita a los investigadores que aborden esta temática en el futuro comenzar su indagación en este punto, pues desde allí es posible conocer una serie de construcciones sociales que subyacen a esta relación.

El sector privado como centro de las interacciones institucionales: El papel del sector privado, especialmente de Minesa en el territorio determina de forma llamativa la organización social del territorio, por lo que sus iniciativas de incentivar la producción agropecuaria en el municipio pueden ser un avance en términos del mejoramiento de la seguridad alimentaria del territorio. Sin embargo, debe venir acompañada de un cambio en el sistema productivo del sistema en el que las labores mineras no sean concebidas como el único medio de producción de capital.

En este sentido, las instituciones estatales no generan una oferta significativa de incentivos o apoyo en términos de formación y capacitación para mejorar las condiciones de quienes se dedican a labores diferentes a la extracción de recursos naturales. Por ello, se fortalece la imagen de estas actividades como la única opción rentable. En consecuencia, el sector privado parece determinar la proyección del municipio, puesto que su injerencia trasciende los factores a los habitualmente se relaciona el sector privado, ya que aporta capital a instituciones que se encuentran amparadas únicamente por el sector público, genera reglamentaciones sanitarias en los lugares donde sus funcionarios satisfacen sus necesidades y procura la articulación de los distintos sectores económicos del municipio.

Parece existir un principio de la denominada desterritorialización del Estado, dado que la cotidianidad del municipio depende de la presencia de una entidad privada como Minesa que

genera expectativas con respecto a la posibilidad de formalizar la situación laboral de la comunidad, el mejoramiento en las condiciones sociales y el acceso a la educación superior por parte de los jóvenes del municipio. Sin embargo, al indagar sobre la proyección que tiene el sector público en el municipio, no es posible avizorar intervenciones significativas en estos temas, sino que el foco de atención parece estar enfocado en el fortalecimiento de la malla vial de la zona minera, pero no se le ha dado prioridad a mejorar la cobertura del puesto de salud, campañas de prevención en temas de salud o el mejoramiento de las instalaciones educativas. Curiosamente, estos son los factores en donde el sector privado ha intervenido, lo que permite notar un desequilibrio con respecto a la demanda para satisfacer necesidades sociales, pues no se trata de una articulación, sino que el sector privado se encarga de generar estrategias para abordar las problemáticas sociales con la minimización del papel estatal en esta labor.

Existe una división de roles de género clara en la comunidad californiana, que es construida por la mezcla entre prácticas religiosas y actividades laborales, por lo que un análisis del contexto sin tener en cuenta estos factores no generara un conocimiento a profundidad del mismo.

La cultura californiana en “vía de extinción”: Vale la pena preguntarse sobre el futuro de la figura del minero en California si se confirma la autorización a Minesa para llevar a cabo sus labores de explotación y la contratación de una parte mayoritaria de la población, pues al convertirse en una labor secundaria es posible que una parte de los conocimientos aplicados a los distintos tipos de minería lleguen a desaparecer o a tener dificultades en su reproducción. Prácticas como el galafardeo y el barequeo en California dependen de la disponibilidad de tiempo de quienes realizan estas labores, así como del apoyo de las autoridades locales. A partir de la entrada de una empresa como Minesa y si llega a cumplirse la contratación de una parte significativa de la

población estas actividades pueden verse disminuidas, por lo que estas prácticas que se han identificado como parte de la identidad contextual corren peligro de no ser reproducidas y los conocimientos asociados a ellas pueden desaparecer.

La desaparición de las creencias y conocimientos desarrollados en el contexto son preocupaciones de la comunidad californiana, debido al temor existente de las migraciones producidas por la llegada de minería a gran escala, las bajas los índices de natalidad, el aumento en las regulaciones y el control a las actividades de minería artesanal son factores, así como la migración de jóvenes para ingresar a la educación superior son factores que preocupan a una buena parte de la comunidad, puesto que ven a su municipio como un territorio en peligro de desaparecer cuando termine la vida útil del proyecto Angosturas.

Prioridad a una economía extractivista sobre la producción de alimentos: es posible afirmar que, tanto en California como en Colombia, se ha impuesto un modelo económico basado en la explotación de recursos naturales, dejando rezagados renglones de la economía como la producción agropecuaria. Esto ha puesto en peligro la seguridad alimentaria de la comunidad. Es fundamental generar estrategias para potenciar la producción alimenticia más allá de los agronegocios (cultivo para biocombustibles), pues la baja producción de alimentos y sus fallas en el proceso de distribución generan problemáticas sociales de notable envergadura, por ello, es importante desnaturalizar estos modelos económicos y buscar medios para la existencia de ambos sectores. Ello, puede permitir la irrupción de categorías fundamentales como la soberanía alimentaria y el buen vivir como remplazo de la categoría de desarrollo.

Los niños y jóvenes no cuentan con espacios de participación significativos: En este contexto no es posible entender la situación de los niños, niñas y jóvenes sin comprender de manera sistémica el contexto general y el de sus familias, no solo porque la unidad familiar sea un derecho humano y del niño, sino que se trata de unidades complejas, en las que todas las partes se encuentran interconectadas. Por tanto, el diseño de programas y políticas públicas que busquen mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes del territorio deben contemplar el mejoramiento general de las condiciones de vida.

No es posible evidenciar una participación activa y efectiva de los niños, niñas y jóvenes del municipio; parece que la mayoría de edad es el punto que permite el posicionamiento de los más jóvenes como actores validos en temas de seguridad alimentaria, política y economía territorial.

Existe un sentimiento de incertidumbre generalizada en el municipio de California, por lo que muchos de los planes y proyecciones del territorio se dan sobre supuestos y escenarios posibles o probables. Parece urgente determinar el panorama próximo del municipio, pues la inquietud sobre el proyecto Angosturas en el territorio ha generado tensiones profundas con respecto al rumbo que tomara la comunidad.

4.1 Recomendaciones:

Se recomienda realizar un trabajo de campo más amplio con el fin de construir más información referente a las practicas alimenticias del lugar, el resultado de este ejercicio es un avance importante, pero puede tener un desarrollo más amplio, si es posible la ejecución de salidas de campo con una mayor duración de tiempo, adicionalmente, si es posible cubrir territorios que en esta ocasión no fueron recorridos como la vereda Santa Ursula.

Es trascendental presentar los resultados de esta investigación a la comunidad californiana con el fin de generar una retroalimentación y reflexión sobre las temáticas que se abordaron. Este puede

ser un insumo importante no solo para el proceso de formación académica del investigador, sino también porque el fin de esta investigación es generar espacios de construcción conjunta de conocimiento. Por ello, deberán crearse estrategias para exponer los resultados de esta investigación a la comunidad y articular todas las lecciones aprendidas al resultado final.

5. Bibliografía

- Alcaldia municipal de California. (2016). *Plan de desarrollo municipal*. Alcaladia Municipal, Santander. California: Plan de desarrollo municipal.
- Aries, P. (1984). La Infancia. *Revista de educacion*, 281, 5-17.
- Banco Mundial. (03 de Septiembre de 2017). *World Bank Group*. Recuperado el 26 de enero de 2018, de Grupo Banco Mundial: <https://datos.bancomundial.org/indicador/AG.LND.ARBL.ZS?end=2015&locations=CO&start=1983&view=chart>
- Baron, F. P. (2015). San Antonio de Padua. *Revista Universidad Ponitificia Bolivariana*, 12(45-46), 319-335.
- Bateson, G. (1998). *Pasos hacia una ecologia de la mente*. Buenos Aires, Argentina: Lohlé-Lumen.
- Becerra, I., Vasquez, V., Zapata, E., & Garza, L. (2008). Infancia y flexibilidad laboral en la agricultura de la exportacion mexicana. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Niñez*, 6(1), 191-215.
- Bourdieu, P. (1997). *Razones practicas: sobre la teoria de la accion*. Barcelona: Anagrama
- Bourdieu, P. (1999). *La dominacion masculina*. Barcelona: Anagrama.
- Braudel, F. (1970). *La historia y las ciencias sociales*. Madrid, España: Alianza Editorial.
- Buitrago, E. (2012). *Entre el agua y el oro: tensiones y reconfiguraciones territoriales en el municipio de Vetas, Santander Colombia*. Bogota: Universidad Nacional de Colombia.
- Bulygin, E. (1987). Sobre el estatus ontologico de los derechos humanos. *Cuadernos de filosofia del Derecho*, 79-84.

- Bustos, G. (octubre de 2002). Enfoque subalterno e historia latinoamericana: nación, subalternidad y escritura de la historia en el debate Mallon-Beverley. *Fronteras de la Historia*, 229-250.
- Butler, J. (Septiembre-Diciembre de 2009). Performatividad, precariedad y políticas sexuales. *Revista de antropología iberoamericana*, 4(3), 321-336.
- CEPAL. (1990). *Elementos para el diseño de políticas industriales y tecnológicas en América Latina*. Santiago de Chile: Naciones Unidas. Comisión económica para América Latina y el Caribe.
- Camargo Sierra, A. P., & Hurtado Tarazona, A. (2011). *Vivienda y pobreza: una relación compleja*. Bogotá: Pontificia universidad javeriana.
- Chertudi, S., & Newbey, S. (1978). *La difunta Correa*. Buenos Aires, Argentina: Huemul.
- Suarez Guava, L. (2008). Juan Díaz engañado por la riqueza. Un artifice de la fortuna y de la tragedia en el mundo colonial. *Maguare*(22), 223-289.
- Constitución Política de Colombia. (2016). *Constitución Política de Colombia de 1991*. Bogotá: Legis.
- Contraloría general de la nación. (2013). *Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista*. Bogotá: Imprenta Nacional.
- Cooperación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. (25 de enero de 2018). *cdmb.gov.co*. Recuperado el 27 de enero de 2018, de Cooperación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga: <http://www.cdmb.gov.co/web/asi-es-la-cdmb/area-de-jurisdiccion>
- Corte Constitucional de Colombia. (15 de Diciembre de 2015). *Corte Constitucional de Colombia*. Recuperado el 10 de Enero de 2017, de [corteconstitucional.gov.co](http://www.corteconstitucional.gov.co): <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-606-15.htm>

- Corte Constitucional de Colombia. (08 de febrero de 2016). *Corte Constitucional de Colombia*. Recuperado el 10 de enero de 2017, de <http://www.corteconstitucional.gov.co: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/c-035-16.htm>
- De Schutter, O. (2014). *Report of the Special Rapporteur on the Right to Food, Olivier De Schutter. Final Report: e Transformative Potential of the Right to Food*. New York: UN Human Rights Council.
- Dehollain, P. (1995). Concepto y factores condicionantes de la seguridad alimentaria en los hogares. *Agroalimentaria, 1*, 4-15.
- Dávalos, A. (2013). *Políticas públicas de seguridad alimentaria con soberanía en Bolivia*. La Paz, Bolivia: Fundacion Tierra.
- Dávalos, P. (2013). Las falacias del discurso extractivista. *Revista Investigacion cientifica*, 1-34.
- El Espectador. (11 de Noviembre de 2017). Posconflicto recibe 45 millones de dolares adicionales. *El Espectador*, pág. 5.
- El Espectador. (12 de Noviembre de 2017). Emiratos Arabes invertira 1000 millones de dolares para extraer oro en Santurbán. *El Espectador*, pág. 4.
- Escobar, A. (2007). *La invencion del tercer mundo: Construccion y deconstruccion del desarrollo*. Caracas, Venezuela: Fundación Editorial el perro y la rana.
- Escobar, A. (2015). Sentipensar con la Tierra: Las Luchas Territoriales y la Dimensión Ontológica de las Epistemologías del Sur. *Revista de antropologia iberoamericana, 11*(1), 12-32.
- Esquivel, S. (2015). *Creacion, critica y subjetividad (Educar para resistir en el sistema mundo-global)*. Oviedo: IMD.
- Esquivel, V. (2011). *La economia del cuidado en America Latina: poniendo a los cuidados en el centro de la agenda*. El Salvador: PNUD.

- FAO. (1996). *Plan of action*. Roma: World Food Summit.
- Fajardo, D. (2002). *Tierra, poder politico y reformas agraria y rural*. Bogota: ILSA.
- Fajardo, D. (2004). *El conflicto armado y su proyeccion en el campo*. Bogota: Banco de la Republica.
- Fals-Borda, O. (agosto de 2008). Origenes universales y retos actuales de la IAP (Investigacion Accion Participativa). *Peripecias*(10), 1-14.
- Fornillo, B. (2009). Proletariado minero, nacionalizacion economica y el reposicionamiento actual de la Central Obrera Boliviana. *Polis, revista latinoamericana*, 1-15.
- Forrester, V. (1999). *El horror economico*. Mexico D.F, Mexico: Fondo de cultura economico.
- Foucault, M. (2006). *La arqueologia del saber*. Ciudad de Mexico, Mexico: Siglo XXI editores.
- Foucault, M. (2012). *El poder una bestia magnifica: sobre el poder, la prision y la vida*. Madrid, España: Siglo XXI.
- Friant, M. (2016). Comercio justo, seguridad alimentaria y globalización: construyendo sistemas alimentarios alternativos. *Iconos*(55), 215-240.
- Friedman, M., & Friedman, R. (1983). *Libertad de elegir: hacia un nuevo liberalismo economico*. Barcelona: Otis.
- Giddens, A., & Turner, J. (1998). *La teoria estructural hoy*. Madrid, España: Alianza.
- Gonzalez, R. A., & Valdivia, V. (Enero de 2017). De los Objetivos del Milenio a los Objetivos del Desarrollo Sostenible: la integración de países en vía de desarrollo por medio de la intensificación del uso de las tecnologías. *Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales*, 149-158.
- Gudynas, E. (2003). *Ecologia, economia y Etica del desarrollo sostenible*. Quito: ABYA-YALA.

- Gudynas, E. (2011). Más allá del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo. En F. Wanderley, *El desarrollo en cuestion. Reflexiones desde America Latina* (págs. 379-410). La Paz: OXFAM.
- Guillen, A. (2014). America Latina: Neoliberalismo, politicas macroeconomicas y proyectos nacionales del desarrollo. *America Latina: Neoliberalismo, politicas macroeconomicas y proyectos nacionales del desarrollo* (págs. 1-37). Quito: Ola Financiera.
- Güiza, L. (octubre de 2013). La pequeña minería: una actividad no tan pequeña. *Dyna*, 80(181), 109-117.
- Göbel, B., & Ulloa, A. (2014). *Extractivismo minero en Colombia y America Latina*. Bogota: Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogota).
- Han, B.-C. (2012). *La sociedad del cansancio*. Barcelona: Herder.
- Harvey, D. (2009). *Breve historia del neoliberalismo*. Londres, Inglaterra: Oxford.
- Hurtado, R. (2011). *La contienda alrededor de la licencia ambiental para el proyecto minero Angostura en el Paramo de Santurban*. Bogota: Ponticia Universidad Javeriana .
- Lander, E. (2014). *El Neoextractivismo como modelo de desarrollo en América Latina y sus contradicciones*. Barcelona: Paidós.
- Levi-Strauss, C. (1979). *Antropologia estrcutural: mito, sociedad y humanidades*. Ciudad de Mexico, Mexico: Siglo XXI editores.
- Liebel, M., & Muñoz, M. M. (2009). *Hacia una ciudadania participativa y protagonica*. Lima: IFEJANT: Instituto de Formacion para Educadores para Jovenes, Adolescentes y Niños Trabajadores de America Latina y el Caribe.

- Maecha, L., Gallego, L., & Pelaez, F. (2002). Situacion actual de la ganaderia de carne en Colombia y alternativas para impulsar su competitividad y sostenibilidad. *Revista Colombiana de Ciencias Quimico Farmaceuticas*, 213-225.
- Martinez, J. (2000). *Ramachandra, Varieties of Enviromentalism*. Londres: Earthscan Publications Ltd.
- Marx, K. (2000). *El capital (obra completa)*. Buenos Aires: Akal.
- Maxwell, S., & Frankenberger, T. (1993). *Seguridad alimentaria del hogar: Conceptos, indicadores y medidas. Una revision tecnica*. New York: UNICEF/IFAD.
- Miklos, T. (2002). Planeacion, prospectiva y estrategica. *V Encuentro de estudios prospectivos* (págs. 119-127). Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
- Molina, J. R. (2011). Minería en los paramos de Colombia y la construcción de una conciencia ecológica. Hacia la búsqueda de la justicia ambiental. *Ecologia Politica*, 74-81.
- Moreno, V. (2016). Multinacionales mineras en Colombia: extractivismo y conflicto armado en Cerro Matoso, 2000-2013. *Criterios: cuadernos de ciencias juridicas y politica internacional*, 9(2), 161-213.
- Moscote, R., & Castellanos, M. L. (2014). Capacidad de retención de agua de suelos en rehabilitación de la mina de carbón "El Cerrejón", La Guajira, Colombia. *Hacia un contexto de las ciencias ambientales: iberoamérica* (págs. 60-66). Santa Marta: Memorias del II Seminario de Ciencias Ambientales Sue-Caribe & VII Seminario Internacional de Gestión Ambiental.
- Navarrete, J. M. (2004). Sobre la investigación cualitativa. Nuevos conceptos y campos de desarrollo. *Investigaciones sociales*, 8(13), 277-299.

- Navarro, S. (2002). *Postmodernismo y metaficcion historiografica: una perspectiva interamericana*. Valencia: Departament de Filologia Anglesa i Alemanya Universitat de Valencia.
- Nino, C. (1984). *Etica y derechos humanos*. Buenos Aires: Paidos.
- Pereda, C., de Prada, M., & Actis, W. (2003). Investigacion accion participativa: propuesta para un ejercicio activo de la ciudadania. *Colectivo Ioe*, 2-26.
- Pereira, M., Ulloa, A., O'Ryan, R., & de Miguel, C. (2009). *Sindrome holandes, mineras y politicas de gobierno para un pais dependiente de los recursos naturales: el cobre en Chile*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Perez Padilla, J., Regalado Pineda, J., & Moran Mendoza, A. (1999). La inhalación doméstica del humo de leña y otros materiales biológicos. Un riesgo para el desarrollo de enfermedades respiratorias. *Revista de Academia Nacional de Medicina*, 19-30.
- Perez, B. (2008). La victoria de la posmodernidad o "el hombre lleno de nada". *Cauriensia: revista anual de ciencias eclesiasticas*(3), 393-431.
- Pikkety, T. (2014). *El capital en el siglo XXI*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Economico.
- Regalsky, P., & Quisbert, F. (2008). *Bolivia indigena: De gobiernos comunitarios en busca de autonomia a la lucha de la hegemonia*. Quito, Ecuador: Publicacion de la casa chata.
- Rodriguez, P. (2004). *La familia en Iberoamerica 1550-1980*. Bogota: Universidad Externado de Colombia.
- Romero, J. (2010). El exito economico de los costeños en Bogota: migracion interna y capital humano. *Documentos de trabajo sobre economia regional*(129), 1-26.
- Rosenberg, L. (2016). Etnografía del trabajo periodístico. Apuntes sobre la inserción del investigador en la sala de redacción de un diario argentino. *Comunidad y sociedad*, 87-109.

- Santos, B. D. (2004). *Reinventar la democracia: reinventar el Estado*. Buenos Aires, Argentina: Sequitur.
- Santos, B., & Garavito, C. R. (2007). *El derecho y la globalización desde abajo: hacia una legalidad cosmopolita*. Barcelona: Anthropos.
- Sassen, S. (2015). *Expulsiones Brutalidad y complejidad en la economía global*. Buenos Aires, Argentina: Katz.
- Schejtman, A. (1980). Economía campesina: lógica interna, articulación y persistencia. *Revista de la Cepal*, 121-140.
- Schuldt, J., & Acosta, A. (2009). Petróleo, rentismo y subdesarrollo: una maldición sin solución? En J. Schuldt, A. Acosta, A. Barandiarán, A. Bebbington, M. Folchi, A. Alayza, & E. Gudynas, *Extractivismo, política y sociedad* (págs. 9-40). Quito: Centro Latinoamericano de Ecología Social.
- Stavengahen, R. (1981). *Sociología y desarrollo*. México: Nuestro tiempo.
- Stevens, P. (2003). *Resource impact curse or blessing? A literature survey*. Dundee: University of Dundee.
- Suarez Guava, L. (2008). Juan Díaz engañado por la riqueza. Un artifice de la fortuna y de la tragedia en el mundo colonial. *Maguare*(22), 223-289.
- Svampa, M. (2013). Consenso de los Commodities y lenguajes de valoración en América Latina. *Nueva sociedad*(244), 30-46.
- Torres Oregon, F., Herrera, F. T., Vizcarra, I. B., & Lutz, B. B. (2015). Etnografía institucional del proyecto estratégico de seguridad alimentaria (PESA) en una comunidad Mazahua. *Nueva Antropología*, 51-81.

UNICEF. (2007). *Justicia y derechos del niño*. Santiago de Chile: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

UNICEF. (2017). *Herramientas Prácticas sobre los Derechos del Niño y la Minería*. Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.

Valdez, F. (2007). *Política, empresa y cambio social. el potencial de la responsabilidad social empresarial*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

Vasquez, A. C., & Buitrago, A. C. (2011). *El gran libro de los paramos*. Bogotá: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Verschoor, G., & Torres, C. (2016). Mundos equivocados: cuando la “abundancia” y la “carencia” se encuentran en la Amazonía colombiana. *Iconos, Revista de Ciencias sociales*(54), 71-86.

Wallerstein, I. (2005). *Análisis de sistemas mundo: Una introducción*. México D.F, México: Siglo XXI.

Yacoub, C., Duarte, B., & Boelens, R. (2015). *Agua y ecología política: el extractivismo en la agroexportación. La minería y las hidroeléctricas en Latinoamérica*. Quito, Ecuador: Abya-Ayala.

Unidos para la Infancia.

de Loma-Ossorio, E. (septiembre-octubre de 2008). El Derecho a la alimentación. Definición, avances y retos. *Boletín Ecos*, 1-10.